

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y TRIBUTARIAS FRENTE A LA DESPOBLACIÓN Y PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Fines.

Artículo 4. Objetivos.

Artículo 5. Definiciones.

TÍTULO PRIMERO. RETO DEMOGRAFICO Y DESPOBLACIÓN

Artículo 6. Competencias del Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico.

Artículo 7. Sensibilización social en materia demográfica.

Artículo 8. informe del impacto demográfico.

TÍTULO II. ZONIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL

CAPÍTULO I. ZONIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

Artículo 9. Delimitación de las zonas rurales que integran el medio rural.

Artículo 10. Criterios para la categorización del medio rural.

Artículo 11. Tipología de las zonas rurales.

Artículo 12. Zonas escasamente pobladas.

Artículo 13. Zonas en riesgo de despoblación.

Artículo 14. Zonas rurales intermedias.

Artículo 15. Zonas rurales periurbanas.

CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Artículo 16. Programación de actuaciones para el Desarrollo Integral del Medio Rural y frente a la Despoblación.

Artículo 17. Instrumentos de Planificación.

Artículo 18. Estrategia Regional frente a la Despoblación. (ERD)

Artículo 19. Estrategia Regional de Desarrollo Rural. (ERDR)

TÍTULO III. POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS APLICABLES EN EL MEDIO RURAL

Artículo 20. Colaboración Institucional.

Artículo 21. Contratación del Sector Público.

Artículo 22. Ayudas y Subvenciones Públicas.

Artículo 23. Empleo Público.

Artículo 24. Simplificación normativa y administrativa.

Artículo 25. Administración Digital.

Artículo 26. Seguridad ciudadana.

Artículo 27. Acceso a Equipamientos y Servicios Básicos en el medio rural.

Artículo 28. Colaboración Público-Privada.

CAPÍTULO II. GARANTÍA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MEDIO RURAL

Sección 1ª De la Garantía de Acceso en Igualdad

Artículo 29. Disposiciones Comunes.

Sección 2ª. Acceso a la Educación Pública en el Medio Rural

Artículo 30. Acceso al Servicio Público Educativo.

Artículo 31. Mantenimiento de los Colegios Rurales.

Artículo 32. Medidas en materia de Prestaciones Complementarias.

Artículo 33. Contrato Programa para Enseñanzas no obligatorias.

Artículo 34. Adecuación de la oferta de Formación Profesional en las zonas rurales.

Sección 3ª. Acceso a la Sanidad Pública

Artículo 35. Garantía en la atención primaria y servicios sanitarios adecuados al medio rural.

Artículo 36. Garantía de acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias.

Artículo 37. Garantía de citas y coordinación de horarios.

Artículo 38. Asistencia farmacéutica en el ámbito rural.

Artículo 39. Programa de avances tecnológicos en la atención médica en el ámbito rural.

Sección 4ª. Acceso Público al Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia y servicios en materia de igualdad

Artículo 40. La Atención Social y servicios en materia de igualdad.

Artículo 41. La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 42. La atención y el cuidado de las personas mayores.

Artículo 43. Recursos residenciales.

Artículo 44. La inclusión social de las personas con discapacidad.

Sección 5ª. Acceso al Transporte Público en el Medio Rural

Artículo 45. Transporte sensible a la demanda.

TÍTULO IV. COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL DEL MEDIO RURAL

CAPÍTULO I. COHESIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL

Artículo 46. Fomento y Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural.

Artículo 47. Creación y Mantenimiento del Empleo en el Medio Rural.

Artículo 48. Apoyo a la promoción económica y empresarial en el medio rural.

Artículo 49. Programas de financiación a la actividad empresarial.

Artículo 50. Apoyo al Sector agrícola, ganadero y forestal.

Artículo 51. Apoyo a la Mejora de la Posición de los Agricultores y Agricultoras en la Cadena de Valor.

Artículo 52. Puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales.

Artículo 53. Apoyo a la demanda de productos agroecológicos y de calidad diferenciada de la región.

Artículo 54. Apoyo a la comercialización de los productos forestales de la región.

Artículo 55. Apoyo a la bioeconomía.

Artículo 56. Acceso a Servicios Bancarios en el Medio Rural.

Artículo 57. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación.

CAPÍTULO II. COHESIÓN SOCIAL

Artículo 58. Conciliación de la vida familiar y laboral.

Artículo 59. La Atención a la Infancia y el Apoyo a las Familias.

Artículo 60. Inclusión Social.

Artículo 61. Vivienda.

Artículo 62. Promoción de la Cultura.

Artículo 63. Fomento del Ocio Responsable.

Artículo 64. Recursos públicos de información y protección de los derechos de las personas consumidoras.

Artículo 65. Medios de comunicación social.

CAPÍTULO III. COHESIÓN TERRITORIAL

Artículo 66. Instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Artículo 67. Infraestructuras del transporte.

Artículo 68. Fomento de las Energías Renovables en el medio rural.

Artículo 69. Eficiencia en el consumo de Agua.

Artículo 70. Tecnologías de la información y la comunicación.

TÍTULO V. FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Artículo 71. Criterio general sobre financiación Institucional.

Artículo 72. Financiación desde los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros instrumentos de financiación de la UE.

TÍTULO VI. MEDIDAS TRIBUTARIAS FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Artículo 73. Medidas para la reducción de cargas impositiva en el medio rural.

TÍTULO VII. GOBERNANZA

Artículo 74. Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación.

Artículo 75. Gestión Pública y Gobernanza de los Instrumentos de Planificación de las Zonas Rurales.

Disposición Adicional Primera. Creación de un Fondo para el Apoyo Financiero a Proyectos Empresariales en Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación.

Disposición Adicional Segunda. Adaptación de la zonificación a los criterios de la Unión Europea.

Disposición Adicional Tercera. Proyectos prioritarios en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Disposición Adicional Cuarta. Adaptación de pliegos de condiciones en la contratación de los servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Disposición Adicional Quinta. Encargos de gestión en montes públicos propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades locales.

Disposición Derogatoria Única. Derogación Normativa.

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.

Disposición Final Segunda. Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha.

Disposición Final Tercera. Modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible.

Disposición Final Cuarta. Modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

Disposición Final Quinta. Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.

Disposición Final Sexta. Modificación de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

Disposición Final Séptima. Adaptación al contenido de la norma.

Disposición Final Octava. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Disposición Final Novena. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, el cambio demográfico ha adquirido una especial relevancia en la agenda política de las Instituciones Europeas, así como de los diferentes Gobiernos de las regiones UE, constituyendo uno de los mayores retos que tendrán que abordar las regiones, ciudades y núcleos rurales de población de Europa, estando determinado principalmente por factores relacionados con el envejecimiento de la población, unas tasas de natalidad bajas y el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la población.

La concepción sobre la respuesta de la UE ante el reto demográfico ya fue puesta de manifiesto por el Comité de las Regiones (CDR) en su Dictamen 2017/C 017/08, en el que se afirmaba que muchas de las políticas europeas relativas a transporte, sociedad de la información, empleo, políticas sociales y sobre medio ambiente, clima y empresa deben contener medidas específicas en favor de las zonas afectadas por dichos retos.

Más recientemente, el Comité de las Regiones (CDR) ha avanzado en sus conclusiones sobre esta materia en el Dictamen SEDEC-VII/001, sobre «Cambio demográfico: propuestas para cuantificar y afrontar los efectos negativos en las regiones de la UE», incidiendo en los peligros que supone la pérdida de población en zonas remotas y escasamente pobladas, particularmente de población joven, así como en el incremento de las tasas de dependencia, y la disminución de personas en edad laboral.

Esta tendencia demográfica negativa, supone según el CDR “una desventaja extraordinaria para los municipios más pequeños en lo que respecta al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y al impulso de la actividad económica y productiva en esas zonas, factores esenciales para retener a la población en el territorio y frenar el fenómeno de despoblación rural que afecta a los Estados miembros de la UE”.

Ante la necesidad de una respuesta política coherente en todos los niveles de gobierno, el CDR reitera su llamamiento en favor de una estrategia europea global sobre el cambio demográfico y subraya que, “para afrontar estos desafíos, será preciso adoptar un enfoque global que abarque una amplia gama de ámbitos políticos a fin de ayudar a invertir (enfoque proactivo) o mitigar (enfoque reactivo) los efectos del cambio demográfico”.

En esta línea la Comisión Europea ha publicado el 17 de junio de 2020 el primer Informe al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los efectos del cambio demográfico, en el que ha resaltado la necesidad de integrar las consideraciones demográficas en las políticas de la UE.

El informe indica que en el contexto de extrema dificultad e incertidumbre, provocado por la pandemia de COVID-19, la Comisión centrará sus esfuerzos en respaldar reformas estructurales que apoyen la cohesión social, la integración y la inclusión, el desarrollo rural, la educación y formación, utilizando todos los instrumentos a su alcance, particularmente mediante el nuevo presupuesto de la UE a largo plazo y su instrumento de recuperación Next Generation EU.

El informe apunta igualmente a la necesidad de elaborar políticas centradas en la realidad sobre el terreno, con el fin de reducir las disparidades entre regiones.

Partiendo de las conclusiones del informe, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la iniciativa “Visión a largo plazo de las zonas rurales”, que establecerá una perspectiva de futuro de las zonas rurales hasta 2040 y recogerá opiniones sobre desafíos tales como cambio demográfico, conectividad, bajos niveles de renta y acceso limitado a los servicios. También explorará soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles a la luz de la transformación digital y climática y la crisis de la Covid-19”.

El Consejo Económico y Social analizó en 2018 en el “Informe sobre el Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial”, que la ruralidad implica directamente desigualdad de oportunidades de jóvenes y mujeres en el empleo, envejecimiento y tasas de dependencia muy altos, dotación de servicios de mercado y de no mercado inferiores al medio urbano, abandono escolar más acentuado, un menor nivel de renta y de prestaciones públicas medias; en sentido opuesto, también representa una mayor diversidad y riqueza ambiental en ecosistemas, un patrimonio natural y cultural únicos, un capital natural que puede convertirse en una vía inmejorable de lucha contra el cambio climático y la mitigación de las huellas ambientales de carbono, hídrica o de intensidad energética o los residuos, una base territorial imprescindible para conseguir vitalizar y consolidar la bioeconomía y la economía circular.

Castilla-La Mancha es una región con un perfil y caracterización eminentemente rural, en la que más del 90% de su geografía es rural, y en la que más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, y solo 9 sobrepasan los 30.000 habitantes.

Estas tendencias demográficas que afectan de lleno al mundo rural, vienen a sumar un nuevo reto a este ámbito, enmarcado en una creciente complejidad social, económica y ambiental, donde ha adquirido una decisiva importancia la sociedad de la información y del conocimiento y las tecnologías emergentes, la nueva relación entre diferentes políticas concurrentes, con un nuevo papel de lo público y de lo privado, destacando la importancia del enfoque territorial, endógeno y participativo, la sinergia de actores y territorios, la importancia de la resiliencia, flexibilidad y adaptación a los cambios, la importancia de la cohesión territorial, económica y social y las nuevas relaciones urbano/rural, mercados, personas consumidoras y productoras más informadas, en un entorno sostenible.

Particular atención requiere en este ámbito el fenómeno de la migración de las mujeres y las personas jóvenes del medio rural al urbano ante la falta de oportunidades profesionales, la escasez de infraestructuras y servicios en general, especialmente en los municipios más pequeños, contribuyendo al fenómeno de la despoblación, el envejecimiento y la masculinización del medio rural.

Resulta igualmente necesario acompasar este impulso demográfico del mundo rural con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), explicitados a través de la Resolución A/RES/70/1, adoptada por La Asamblea General de la ONU, por requerir que las tendencias y previsiones demográficas se incorporen a las estrategias y políticas de desarrollo rural y urbano.

La regulación legal sobre esta materia, dictada en ejercicio de la competencia estatal atribuida por el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, se inició con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de carácter transversal y orientación territorial, con una vocación de conjugar el desarrollo económico con la preservación del medio natural, contemplando acciones y medidas para el desarrollo sostenible, tanto de origen nacional como comunitario, aplicable entre las diferentes Administraciones Públicas de modo concertado, en atención a sus respectivas competencias.

La evolución de la población en España, reflejada en los datos publicados por el INE, junto con el compromiso de las Comunidades Autónomas más afectadas por los desequilibrios demográficos, entre las que se encuentra nuestra región, impulsaron la necesidad de afrontar los desafíos demográficos como una política de Estado, adquiriendo el Gobierno de España el compromiso de elaborar y desarrollar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de carácter global y transversal, en la que participen todas las Administraciones Públicas con el objetivo de abordar los graves problemas demográficos. Para concretar el contenido, el Gobierno ya ha aprobado las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que definen los objetivos y líneas de acción prioritarias, así como la hoja de ruta para la aprobación de la estrategia.

Indicado lo anterior, el determinante impacto que la demografía tiene en el mundo rural, que en Castilla-La Mancha se traduce en la existencia de zonas con niveles de despoblación muy por encima de la media nacional y europea, requiere considerar esta nueva realidad y sus desafíos con desarrollos normativos propios, que abarquen todas las dimensiones de la realidad del mundo rural en la región y aporten una visión ajustada a la realidad de los territorios rurales en Castilla-La Mancha, donde la despoblación condiciona su desarrollo integral.

En este marco, la Región de Castilla-La Mancha necesita dotarse de los instrumentos normativos necesarios a fin de regular y potenciar las vías de actuación en torno al mundo rural y a su desarrollo integral y sostenible, con un enfoque global que abarque una amplia gama de ámbitos sectoriales a fin de invertir los efectos del cambio demográfico.

Los precedentes legislativos autonómicos se iniciaron con la Ley 4/2004, de 18 de mayo de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural, que analizaba la realidad del mundo rural con una perspectiva eminentemente sectorial agraria, avanzando la regulación hacia una visión integradora e inclusiva, regulándose en la Ley 12/2010 de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, la necesidad de integrar la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural, y culminando en la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, promotora de medidas de fomento de la autonomía social y profesional de las mujeres en el medio rural.

Del mismo modo, la Ley 5/2017, de 30 de noviembre de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, ha supuesto un nuevo impulso a las zonas rurales afectadas en mayor medida por el fenómeno de la despoblación, amparando actuaciones de acción positiva en las denominadas Zonas ITI (Inversiones Territoriales Integradas), definidas en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se estableció la Gobernanza de la Inversión Territorial Integrada de Castilla-La Mancha, enmarcado todo ello en el ámbito de la Estrategia frente al despoblamiento y declive socioeconómico 2014-2020.

Es labor de la Administración Pública orientar y propiciar el avance en la consecución de la igualdad territorial en el acceso a las oportunidades y garantías básicas de la población, así como la lucha contra el despoblamiento, la igualdad de género y de las personas lgtbi, las garantías juveniles, los servicios sociales, la dotación de infraestructuras públicas, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el acceso al empleo en una economía territorialmente desarrollada, equilibrada y sostenible.

Por todo ello, y ante este gran reto de la sociedad castellano- manchega, se hace imprescindible abordar la elaboración de la presente Ley, que tiene un carácter transversal en las actuaciones y garantista para la ciudadanía del ámbito rural, con un enfoque de desarrollo integral del medio rural, en línea con la Política de Cohesión Territorial que está impulsando la UE, propiciando una acción coordinada de las políticas sectoriales, el desarrollo y en su caso la modificación de los instrumentos vigentes, incorporando aquellos aspectos de la normativa previa que requieran de regulación legal, y regulando los nuevos instrumentos necesarios para la implementación de esta nueva estrategia de desarrollo del medio rural y frente al despoblamiento.

Esta nueva regulación tiene la vocación de superar el horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural, centradas en el “segundo pilar” de la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión de los territorios rurales supone interacciones con actividades y sectores diversos, que junto con el agrario y el forestal, sirvan para impulsar el desarrollo rural de la región y sus municipios en alineación con los ODS.

La regulación contenida en esta ley se dicta al amparo de títulos competenciales autonómicos diversos, que abarcan las competencias autonómicas en materia igualdad (artículo 4.2 y 4.3 del Estatuto de

Autonomía), ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, (artículo 31.1.2), obras públicas de interés para la región (artículo 31.1.3), carreteras y caminos, y transporte terrestre (artículo 31.1.4), agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias (artículo 31.1.6), tratamiento especial de zonas de montaña (artículo 31.1.9) planificación y fomento de la actividad económica de la región (artículo 31.1.12), artesanía (artículo 31.1.14), fomento de la cultura e investigación (artículo 31.1.17) , turismo (artículo 31.1.18), promoción del deporte y ocio (artículo 31.1.19), asistencia social y servicios sociales (artículo 31.1,20), industria e instalaciones de producción, distribución y transporte de energía (artículo 31.1.27), montes,)aprovechamientos y servicios forestales (artículo 32.29) sanidad (artículo 32.3), medio ambiente (artículo 32.7), solidaridad regional artículo (41.1), autonomía financiera (artículo 42,1), y hacienda regional (artículo 44).

La presente norma se aborda con un enfoque multisectorial y transversal, en atención a la complejidad y heterogeneidad de actuaciones que requiere una actuación integral en el medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación y con la vocación de que el reto demográfico este presente, tanto en la planificación derivada como en la normativa sectorial, con la finalidad primordial de procurar servicios públicos básicos adaptados a las necesidades de su población, posibilitando la igualdad de oportunidades efectiva para sus habitantes, y la cohesión económica y social del medio rural.

El Anteproyecto de Ley consta de setenta y cinco artículos distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

El Título Preliminar contiene las disposiciones generales de la Ley, y en particular las referidas al objeto, ámbito de aplicación, fines y objetivos que se pretenden conseguir.

El Título I recoge las competencias que le corresponden al Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico, y dos cuestiones a destacar: la sensibilización social en materia demográfica y la obligación de la Administración regional de incorporar un informe sobre impacto demográfico en la producción normativa y en la elaboración de planes y programas, así como la inclusión de indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y la lucha frente a la despoblación en los Presupuestos Regionales.

El Título II se divide en dos capítulos. En el Capítulo I se desarrolla un nuevo planteamiento de zonificación del medio rural de Castilla-La Mancha, clasificando las zonas rurales en las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, zonas rurales intermedias, y zonas rurales periurbanas. Además, en atención a la gravedad e intensidad del problema demográfico, se crean dos categorías de zonas escasamente pobladas: zonas de intensa despoblación y zonas de extrema despoblación. Con esta tipología de zonas se reconoce la diversidad rural existente en nuestra región y la necesidad de una atención diferenciada. La delimitación de las zonas rurales, es fundamental para identificar las características y necesidades de cada una de ellas y poder así diseñar políticas específicas frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en la región.

El Capítulo II, regula la planificación y programación del medio rural y recoge como instrumentos de planificación, para abordar el desarrollo de las distintas tipologías de zonas rurales, con efectos a medio y largo plazo: la Estrategia Regional frente a la despoblación (ERD) y la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial (ERDR). La ERD es el instrumento principal para la aplicación de la Ley, pues en ella se concretarán las actuaciones y medidas a desarrollar en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Considerando el carácter transversal y multisectorial de las políticas aplicables al medio rural, la Ley dispone la obligación de que todos los instrumentos de planificación sectorial que apruebe la Administración regional deben ajustarse a lo establecido en esta Ley y en la Estrategia Regional frente a la Despoblación. Igualmente, se dispone que la ERDR debe tener como objetivo prioritario las zonas rurales más afectadas por la despoblación.

El Título III se divide en dos capítulos. En el Capítulo I se hace hincapié en los principios aplicables al medio rural, que deben guiar las políticas de desarrollo del medio rural y frente a la despoblación. La Ley aboga por la colaboración institucional con el objetivo de definir las políticas públicas y mejorar la prestación de servicios públicos en el medio rural e impulsa la colaboración público-privada para hacer frente a la despoblación. Una atención especial merece las actuaciones tendentes a conseguir que cada

zona rural quede cohesionada funcionalmente, tanto en su interior como con su entorno.

Se prevén medidas para utilizar la contratación pública como instrumento para hacer frente a la despoblación; así como para apoyar el acceso a las ayudas y subvenciones públicas por parte de solicitantes de las zonas rurales más afectadas por el cambio demográfico o para propiciar que los empleados públicos, preferentemente los docentes, sanitarios y sociales, se establezcan en el medio rural.

El Capítulo II, regula en cinco secciones la garantía del acceso de la población rural a unos servicios públicos básicos de calidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas en el territorio, incidiendo en el acceso educativo y sanitario, atención social y a la dependencia e inclusión de las personas con discapacidad. Una de las prioridades es la mejora de la atención y el cuidado de las personas mayores que viven en el medio rural, promoviendo el envejecimiento activo y saludable y asegurando el acceso al apoyo necesario para el envejecimiento de la población prestando especial atención a la fragilidad y la dependencia.

Por último, se prevé reforzar el acceso al transporte público para satisfacer las necesidades de movilidad de los entornos rurales. Para ello, se prestará principalmente a través del transporte sensible a la demanda, con la finalidad de permitir que servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales sean accesibles a toda la ciudadanía, en especial a las personas con discapacidad, con movilidad reducida o mayores.

El Título IV aborda las políticas públicas para el impulso de la cohesión económica, social y territorial del medio rural, a través de actuaciones vinculadas a un modelo de desarrollo económico basado en una economía verde, digital, accesible y sostenible, para dotar de oportunidades a las zonas en declive demográfico, y consta de tres capítulos.

El Capítulo I, sobre cohesión económica apuesta por dinamizar el territorio y convertir las zonas rurales más afectadas por la despoblación en ámbitos de oportunidades. Destacan las medidas orientadas a la diversificación de la actividad económica, el fomento del emprendimiento, la creación y mantenimiento del empleo o el apoyo a la promoción de actividades y empresas en el medio rural. Además, para apoyar a diferentes sectores

claves en el medio rural, como el de la bioeconomía, el agrario o agroalimentario o forestal, se promueve un conjunto de actuaciones que generen valor en términos económicos, sociales y medioambientales.

Por otra parte, se prioriza el fomento de la investigación, desarrollo e innovación en el medio rural, destacando el papel de la actividad investigadora para ofrecer una respuesta a los nuevos retos a los que se enfrentan los sectores productivos regionales y aportar soluciones a medida de las necesidades de la actividad económica productiva que mejoren la competitividad de dichos sectores. Asimismo, se impulsará un centro que coordine la investigación sobre despoblación, los retos demográficos y las oportunidades en el medio rural.

Por último, se recogen una serie de actuaciones para facilitar la accesibilidad a los servicios financieros y bancarios de las personas que viven en el medio rural.

El Capítulo II, sobre cohesión social regula un conjunto de medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para garantizar una adecuada atención a la infancia y el apoyo a las familias o para facilitar la inclusión social y la atención a las personas que se encuentran en situación de riesgo o especial vulnerabilidad. En particular, destacan las medidas para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, de las personas que residen principalmente en las zonas en situación demográfica desfavorable, mediante la creación de la bolsa de la Vivienda Rural y una nueva categoría de vivienda rural protegida, estableciendo un programa de financiación específico o impulsando la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas ya existentes.

Por otra parte, se impulsa el empleo de mecanismos que faciliten la accesibilidad a una información veraz y a los servicios de información y protección de las personas consumidoras para lograr un mayor grado de inclusión en el medio rural. Asimismo, se apuesta por el acceso a una oferta cultural en las zonas rurales afectas por la despoblación, mediante el impulso de programas culturales y actividades de ocio responsable, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación.

El Capítulo III, sobre cohesión territorial regula cuestiones relativas a urbanismo, con la inclusión de una visión específica para el mundo rural, el fomento de las energías renovables o la garantía de acceso por carretera a

los núcleos de población y de un servicio de abastecimiento de agua de calidad para el consumo humano y la actividad económica del medio rural. Destaca la apuesta para frenar la brecha digital entre el entorno urbano y el rural, garantizando una conectividad digital de altas prestaciones para el 100% de las localidades de banda ancha y móvil, así como impulsar la capacitación de la ciudadanía en competencias digitales.

El Título V, establece determinadas reglas y principios para la financiación de las medidas del desarrollo del medio rural y de lucha frente a la despoblación, que corresponderá a la Administración regional, asistiéndose con otros fondos que sean de aplicación de la UE o de otras Administraciones Públicas.

El Título VI habilita el establecimiento de medidas de política fiscal regional dirigidas a revertir la situación demográfica desfavorable que presentan las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, mediante la revitalización de la economía de sus habitantes.

La finalidad última de tales medidas no es otra que contribuir a la igualdad efectiva de las personas que viven en el medio rural en la Región, procurar el progreso social y económico de sus habitantes y una distribución más equitativa de la renta regional y personal. Todo ello, en consonancia con el mandato constitucional establecido en los artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución española.

Para ello, se posibilita la aprobación de beneficios fiscales que podrán afectar tanto a los tributos propios de la comunidad autónoma como a los cedidos, y que estarán dirigidos a las personas que residan en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, con el fin de que tratan de incentivar el mantenimiento y el establecimiento de personas en estas zonas

El Título VII, regula la gobernanza frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural. En primer lugar, se crea el Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha, como órgano de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales de la región, y en aras de garantizar la participación ciudadana, incorporará en su composición a los actores económicos y sociales más representativos, presentes en el territorio

regional. Y, por último, se establece que los instrumentos de Planificación de las zonas rurales regularán sus propios órganos de gobernanza.

De las disposiciones complementarias procede destacar lo siguiente:

Con el objetivo de favorecer la reactivación de la actividad económica de las zonas rurales afectadas por la despoblación, se autoriza en la Disposición Adicional Primera, la creación de un Fondo con una dotación inicial de 10.000.000 euros, para el apoyo financiero a proyectos empresariales viables y, en la Disposición Adicional Tercera, se procede a determinar el mecanismo por el que los proyectos empresariales procedentes de estas zonas rurales serán considerados como proyectos prioritarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2020, de 24 de junio, de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios.

En la Disposición Final Cuarta, se modifica la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, para entre otras cuestiones, garantizar que en las localidades afectadas por la despoblación se mantenga abierto los colegios rurales que cuenten, al menos, con un mínimo de cuatro alumnos o alumnas, que cursen los niveles de educación infantil y de educación primaria y, su mantenimiento de forma excepcional con menos alumnos y alumnas.

Por último, en virtud de las facultades atribuidas a las Comunidades Autónomas en los artículos 46.1.c) y 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en la Disposición Final Quinta se modifica la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, para incorporar un paquete de medidas que afectan tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física como al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tales medidas abogan por otorgar deducciones más ventajosas para las personas contribuyentes localizadas en zonas rurales con problemas de despoblación de la región, y encuentran su justificación constitucional, entre otros, en los artículos 9.2 y 40.1 de la Carta Magna, tal y como se ha señalado anteriormente en la explicación del contenido del Título VI.

Por un lado, se establece una medida fiscal pionera e inédita en las Comunidades Autónomas de régimen común, como es la aplicación de una deducción de un porcentaje de la cuota íntegra autonómica del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a favor de personas contribuyentes que tengan su residencia habitual y estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas, que se completa con el establecimiento de una nueva deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales.

Para la aplicación de las referidas deducciones, la residencia habitual de una persona física es considerada, en todo caso, como una circunstancia personal y cuando se trata de convivencia con otras personas de su unidad familiar, como una circunstancia familiar. En este punto, no debemos dejar de lado que la residencia habitual, además de ser el hogar familiar, es el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos de las personas físicas.

Sobre tales circunstancias personales y familiares el ordenamiento jurídico vigente permite a las Comunidades Autónomas establecer deducciones siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta, minoración en la regulación de deducciones previstas que no se produce por operar la primera de ellas sobre el conjunto de las rentas de la persona contribuyente, y la segunda sobre las cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

La propuesta de inserción en la normativa autonómica de una deducción sobre la cuota tributaria autonómica del IRPF a las personas residentes en zonas rurales y otra por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual a zonas escasamente pobladas pone el acento en “la residencia habitual” como elemento caracterizador del acceso a dichos incentivos fiscales, respetando los principios de territorialidad y de unidad del mercado interno, que impiden a las Comunidades Autónomas adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios (arts. 157.2 y 139.2 CE).

Las medidas tributarias incluidas en esta Ley tienen como objetivo luchar contra el fenómeno de la despoblación y son parte esencial del ejercicio de la autonomía financiera y del principio de territorialidad de Castilla-La Mancha.

Los incentivos fiscales en el IRPF recaen sobre situaciones que cumplen con los puntos de conexión de la Ley 22/2009 como es, esencialmente, el de la residencia habitual. En las dos medidas contempladas, la residencia no actúa como un elemento de discriminación entre personas residentes en zonas rurales de Castilla-La Mancha y los no residentes en dichas zonas, sino como el principal parámetro de una política fiscal diferenciada dirigida a garantizar el principio constitucional de igualdad material de los individuos. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha aprobado las diferencias de tratamiento jurídico y fiscal que existen en nuestro Estado como consecuencia de los diferentes poderes tributarios (estatal, autonómico y local).

Dos fines constitucionales justifican el tratamiento fiscal que se ofrece a los contribuyentes:

En primer lugar, el ya citado principio de igualdad material consagrado en el artículo 9.2 CE. Este precepto emite un mandato a los poderes públicos para que garanticen la igualdad del individuo y los grupos en los que se integra de manera real y efectiva.

Este principio avala la llamada “discriminación positiva” con el fin de ofrecer un tratamiento jurídico diferente a situaciones, individuos o colectivos que se encuentran en una posición desfavorable o discriminatoria. A través del tratamiento diferente a situaciones que se encuentran en una situación objetiva de comparabilidad, se pretende alcanzar una igualdad efectiva dentro de la sociedad. En este contexto, la despoblación afecta principalmente a los entornos rurales y provoca una pérdida de servicios públicos esenciales y reduce notablemente las oportunidades de desarrollo para sus habitantes en detrimento de las zonas más pobladas, lo que redundará en un mayor gasto para la persona contribuyente al acceder a esos servicios esenciales

En segundo lugar, el artículo 40.1 CE establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. La articulación de medidas tributarias que buscan contrarrestar el fenómeno de la despoblación pretende asegurar un progreso socioeconómico de las zonas más afectadas por la despoblación en Castilla-La Mancha. Además, al asegurar el crecimiento económico de las zonas rurales de nuestra región se asegura

también, de manera indirecta, la expansión económica y el progreso social de toda la región en su conjunto.

Con justificación en los mismos principios constitucionales, asimismo se establecen determinados beneficios fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), consistentes en la regulación de tipos reducidos para la transmisión de inmuebles ubicados en los municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual o que sean destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o a locales de negocio, así como bonificaciones de la cuota tributaria por actuaciones en suelo industrial y terciario en las zonas rurales antes mencionadas; medidas fiscales que se modulan en función del nivel de incidencia del fenómeno de la despoblación.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta Ley es regular y establecer principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible.
2. Asimismo, la presente Ley regula la gobernanza que articulará la acción pública coordinada de las diferentes Administraciones, con competencias en las políticas sectoriales de aplicación en el medio rural y de lucha contra la despoblación. Se garantizará la participación de los actores sociales y económicos presentes en el territorio regional.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley es de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como a los organismos, entidades y empresas que integran el Sector Público Regional.
2. Del mismo modo, y sin perjuicio del respeto a la autonomía local, las disposiciones de esta ley serán también aplicables a las Administraciones locales de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Fines.

Los fines perseguidos con esta ley son:

1. Garantizar el mantenimiento de la población del medio rural, mejorando su calidad de vida, así como la viabilidad económica y social del mismo.
2. Atraer y retener población al medio rural, mediante la puesta en valor del mismo, la mejora de las infraestructuras y servicios a disposición

de sus habitantes, así como a través de un modelo de desarrollo económico basado en una economía verde, digital, accesible y sostenible distribuida entre las localidades del entorno.

3. Impulsar el equilibrio y la cohesión social, económica y territorial, así como el desarrollo integral del medio rural, como principios básicos para luchar contra la despoblación, fomentando una redistribución justa y equitativa de los recursos entre el medio rural y urbano.
4. Promover y conservar los valores paisajísticos, culturales y de ocio de la Región, así como los modelos sostenibles de producción, como motores de desarrollo del medio rural.
5. Promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos en el medio rural, y poner en marcha actuaciones para remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud, así como combatir las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres rurales.

Artículo 4. Objetivos.

En el cumplimiento del objeto y fines previstos en los artículos 1 y 3, la actuación pública de la Administración Regional se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:

- a) Mejorar la calidad de vida de la población del medio rural, elevando el grado de bienestar de sus habitantes y asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes, que garanticen la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, incidiendo en el acceso educativo, prestaciones sanitarias, atención social, dependencia, discapacidad, transportes, vivienda, energía, agua y dotación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
- b) Frenar los procesos de despoblación del medio rural, implementando medidas de acción positiva dirigidas a las personas que viven en los núcleos comprendidos en las zonas rurales que sufren el fenómeno de la despoblación y el declive socioeconómico.
- c) Visibilizar y reconocer el valor del aporte de las mujeres a la economía, la cultura, la sociedad, el cuidado de la vida y el desarrollo del medio rural.

- d) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades económicas competitivas y multifuncionales, diversificando su economía, con la incorporación de nuevas actividades económicas compatibles con un desarrollo sostenible.
- e) Promover las energías renovables, la bioeconomía, la producción natural, ecológica, sostenible y la economía circular, como actividades básicas en la economía rural.
- f) Incentivar la protección, rehabilitación, recuperación y utilización del patrimonio natural, cultural material e inmaterial, etnológico e histórico autóctonos como vía de valorización económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo rural y del sentido de pertenencia a sus habitantes.
- g) Fomentar el desarrollo de un turismo sostenible, mediante proyectos compatibles con el medio natural, la integración de la actividad turística en la población rural y los valores medioambientales.
- h) Promocionar y conservar las tradiciones, fiestas populares, la riqueza gastronómica y los oficios artesanos, como valores diferenciales del medio rural.
- i) Mantener y mejorar las oportunidades de desarrollo del medio rural mediante la financiación de programas y proyectos de I+D+i adecuados a la realidad rural.
- j) Generar la transformación digital del tejido productivo y empresarial actual y futuro de las zonas rurales. Al igual que capacitar a la ciudadanía provocando la transición a una sociedad del conocimiento y la obtención de habilidades de tecnológicas avanzadas para una empleabilidad plena.
- k) Desarrollar el mecanismo participativo e invertir en el capital social territorial, con el fin de integrar y coordinar a agentes sociales y organizaciones implicadas en el medio rural, con el objeto de optimizar actuaciones y recursos financieros disponibles para la consecución de un espacio rural inteligente, accesible, sostenible, territorial e integrador.
- l) Visibilizar los aspectos y valores positivos que atesora la vida rural y sus ventajas competitivas, para contrarrestar la hegemonía cultural y social que ensalza la vida urbana.

m) Impulsar la economía plateada como una oportunidad que ofrece el envejecimiento de la población, para desplegar un nuevo sector de actividad y de empleo en el mundo rural.

Artículo 5. Definiciones.

1. A efectos de esta ley se entiende por:

a) Desarrollo Rural Integral: Proceso de planificación socioeconómica regional, realizado de modo transversal, con la finalidad de articular políticas plenas que garanticen el progreso y la cohesión económica y social del medio rural.

b) Medio Rural: Espacio geográfico que abarca las zonas rurales de Castilla-La Mancha y su población.

c) Zona Rural: Cada una de las agrupaciones municipales en las que se subdivide el medio rural, para la aplicación de las medidas derivadas de la planificación y programación de desarrollo territorial del medio rural regulado por esta Ley.

d) Estrategia Regional frente a la despoblación (ERD): Instrumento principal para la planificación social, económica y territorial de la acción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con las tipologías de zonas rurales clasificadas como escasamente pobladas y riesgo de despoblación.

e) Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR): Es el instrumento base de planificación de la política de desarrollo rural, aplicable como complemento a las políticas agrícolas, en el que se definen las medidas y objetivos de desarrollo rural, las zonas rurales de aplicación, los instrumentos a utilizar y las medidas a realizar.

f) Impacto demográfico: identificación y valoración de los diferentes efectos y resultados de una norma o de una política pública en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el objeto de establecer las medidas para adecuarlas a la lucha frente a la despoblación.

g) Estancia Efectiva: Se considerará como estancia efectiva en un municipio de Castilla-La Mancha, aquella que pueda acreditarse con la certificación de los respectivos padrones municipales y que coincida con los siguientes indicadores de permanencia en el municipio:

- Certificación de tarjeta sanitaria, adscrita al centro de salud asignado en la zona básica de salud de pertenencia del municipio donde se encuentra empadronada.

- Certificación, en su caso, de que las personas menores de edad, en edad de escolarización obligatoria, cuentan con una matrícula en alguno de los centros educativos de la localidad de referencia, para el municipio donde se encuentre empadronada.

TÍTULO PRIMERO

RETO DEMOGRÁFICO Y DESPOBLACIÓN

Artículo 6. Competencias del Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico.

Corresponde al Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico:

a) Establecer las directrices de la acción autonómica frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.

b) Impulsar la implementación de la perspectiva demográfica en la acción del gobierno autonómico, así como el seguimiento y la evaluación de su efectividad.

c) Aprobar la Estrategia Regional frente a la despoblación

Artículo 7. Sensibilización social en materia demográfica.

1. Corresponderá a las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha la sensibilización de la sociedad sobre el cambio demográfico y sus implicaciones, así como sobre los valores que caracterizan la vida en el medio rural y de sus ventajas sociales, económicas y ambientales.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán con los medios de comunicación social que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la transferencia a la ciudadanía del conocimiento en materia demográfica.

3. Se pondrá en valor la imagen y reputación del medio rural, potenciando con estrategias territoriales de comunicación, la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas sociales y económicas, destacando los valores que caracterizan la vida en el mundo rural.

Artículo 8. Informe del impacto demográfico

1. En los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las desarrollen, así como la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Regional, se deberá incorporar un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación.

2. En la elaboración de los presupuestos regionales se tomarán en consideración indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias.

3. En la memoria de los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas de lucha frente la despoblación recogidas en la ERD Y ERDR.

4. El órgano con competencia en materia de Reto demográfico proporcionará directrices, criterios y metodologías para facilitar la elaboración del informe previsto en el apartado 1.

TÍTULO II
ZONIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL
CAPÍTULO I
ZONIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

Artículo 9. Delimitación de las zonas rurales que integran el medio rural.

1. Al objeto de concretar y aplicar las medidas derivadas de la planificación y programación reguladas en la ley, en el medio rural se delimitarán zonas rurales integradas por agrupaciones de municipios.

2. La delimitación de las agrupaciones municipales que configuren cada una de las zonas rurales, se efectuará teniendo en cuenta su contigüidad, homogeneidad y las zonificaciones existentes para la prestación de los servicios públicos de competencia de la Administración Regional.

3. Las agrupaciones de municipios o de núcleos de población que configuren cada una de las zonas que integran el medio rural, serán aprobadas por Decreto del Consejo de Gobierno y clasificadas según la tipología definida en el artículo 11.

Artículo 10. Criterios para la categorización del medio rural.

1. La categorización del medio rural de Castilla-La Mancha requiere del establecimiento de una zonificación del mismo, para lo que se tendrán en cuenta criterios demográficos, de actividad económica, de usos del suelo y de accesibilidad en relación al medio urbano.

2. Como criterios demográficos se utilizarán el tamaño de la población de los municipios y de núcleos de población que integran las zonas, la densidad de las mismas, la evolución de su población y su envejecimiento.

3. Como criterios de actividad económica se utilizará el empleo en los diferentes sectores de la actividad económica de la población de las zonas.

4. Como criterios de uso del suelo se utilizará la cobertura de suelo artificial, agrícola y forestal de las zonas.

5. Como criterio de aislamiento geográfico y accesibilidad, se utilizarán el tiempo medio de acceso, en automóvil por carretera, desde los núcleos de población de los municipios de las zonas al núcleo urbano más próximo de la provincia de más de 30.000 habitantes.

6. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno se establecerán los indicadores estadísticos a utilizar para cada uno de los criterios establecidos.

Artículo 11. Tipología de las zonas rurales.

1. Las zonas que integran el medio rural de Castilla-La Mancha, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, zonas rurales intermedias, y zonas rurales periurbanas.

2. De modo excepcional podrán incluirse en las categorías descritas en el párrafo anterior municipios o núcleos de población que, sin reunir alguno de los requisitos previstos en los artículos siguientes, así lo requieran en atención a su homogeneidad, funcionalidad o contigüidad.

Artículo 12. Zonas escasamente pobladas.

1. Como zonas escasamente pobladas se clasificarán aquellas agrupaciones de municipios o núcleos de población integradas mayoritariamente por municipios de pequeño tamaño, con una densidad conjunta de población de menos de 12.5 habitantes por km², altas tasas de envejecimiento y pérdidas intensas de población, con un importante aislamiento geográfico con respecto a municipios de más de 30.000 habitantes, un alto porcentaje de suelo de uso forestal, y una elevada significación de la actividad agraria.

2. En consideración al grado de despoblación, se establecen las siguientes categorías de zonas escasamente pobladas:

- a) Zonas de intensa despoblación: aquellas agrupaciones de municipios con densidad superior a 8 habitantes por km².
- b) Zonas de extrema despoblación: aquellas agrupaciones de municipios con densidad de población menor de 8 habitantes por km².

Artículo 13. Zonas en riesgo de despoblación.

Se clasificarán como zonas en riesgo de despoblación aquellas agrupaciones de municipios o núcleos de población con densidad de población menor de 20 habitantes por km², pero mayor de 12,5 habitantes por km², altas tasas de envejecimiento y una evolución negativa de su población, con una

accesibilidad media o baja con respecto a municipios de más de 30.000 habitantes, con elevada significación del empleo agrario, con más del 75% de su población residiendo en municipios menores de 2.000 habitantes, con usos del suelo tanto agrícolas como forestales.

Artículo 14. Zonas rurales intermedias.

1. Como zonas intermedias serán clasificadas aquellas agrupaciones de municipios o núcleos de población, con una densidad de población superior a 20 habitantes por km² e inferior a 50 habitantes por km², fuera del ámbito directo de influencia de las áreas urbanas y una accesibilidad media a los mismos, con una densidad de población en torno a la media regional, población estable o en ascenso y con más del 75% de su población residiendo en municipios de más de 2.000 habitantes.

2. En consideración a la actividad económica, se establecen las siguientes categorías de zonas intermedias:

- a) Con predominio de la actividad agrícola.
- b) Con actividad económica diversificada.

Artículo 15. Zonas rurales periurbanas.

Como zonas periurbanas serán clasificadas aquellas agrupaciones de municipios o núcleos de población, con una densidad de población superior a 50 habitantes por km² y una tendencia creciente de la población, con una tasa de envejecimiento por debajo de la media regional, que por su proximidad a las áreas urbanas, mantienen una intensa relación y comunicación con las mismas, con desplazamientos diarios por motivo de trabajo, estando la actividad laboral de su población relacionada, casi en su totalidad, con los sectores de actividad secundarios y terciarios.

CAPÍTULO II

PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Artículo 16. Programación de actuaciones para el Desarrollo Integral del Medio Rural y frente a la Despoblación.

La programación de las actuaciones de la Administración Regional en esta materia estará guiada por los principios del desarrollo del medio rural con

una visión integral, integradora y sostenible del mismo, que atienda a las singularidades de las zonas rurales, prestando especial interés a la lucha frente a la despoblación y al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, procurando ampliar las bases de articulación interadministrativa y empoderamiento de la población, a través de la participación efectiva en la definición e implementación de actuaciones en el territorio.

Artículo 17. Instrumentos de Planificación.

1. El desarrollo de las distintas tipologías de zonas rurales contempladas en esta norma, se estructurarán en torno a los siguientes instrumentos básicos de planificación:

- a) La Estrategia Regional frente la Despoblación (ERD).
- b) La Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR).

2. Atendiendo al carácter transversal de las políticas aplicables al medio rural, los instrumentos de planificación sectorial que apruebe la Administración Regional se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley y en la Estrategia Regional frente a la Despoblación.

Artículo 18. Estrategia Regional frente a la Despoblación. (ERD)

1. La Estrategia Regional frente a la Despoblación, elaborada con una amplia participación institucional y social, definirá los objetivos, actuaciones y medidas a desarrollar por la Administración Regional en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, el modelo de gobernanza, mecanismos de financiación, así como la evaluación y seguimiento de la misma a través de indicadores.

2. Se vinculará la Estrategia a las complementariedades fruto del resto de marcos en el que se va a insertar, tanto a nivel regional, como nacional, europeo e internacional.

3. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación por razón de sexo, así como la incorporación de la perspectiva de género, serán un eje transversal en las disposiciones y redacción

contenidas en la ERD, así como cualquier ámbito directo o indirecto vinculado a su aplicación.

4. La Estrategia Regional frente a la Despoblación, será aprobada mediante Decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación.

5. La ejecución de la Estrategia se llevará a cabo por la Administración Regional y, en su caso, por las Administraciones Públicas competentes de acuerdo con los mecanismos de cooperación y colaboración que se establezcan.

6. La Estrategia Regional frente a la Despoblación tendrá una vigencia mínima de diez años, con una revisión intermedia una vez transcurridos los primeros cuatro años de aplicación.

Artículo 19. Estrategia Regional de Desarrollo Rural. (ERDR)

1. La ERDR se definirá a través de objetivos y medidas, articulándose cada medida en función de la tipología de las zonas de intervención, las potenciales personas beneficiarias, la dotación financiera, así como el mapa de indicadores para su evaluación ex ante y ex post.

2. La aplicación se desarrollará mediante concertación con cada administración pública implicada y con la sociedad del medio rural, con metodología participativa, y con un sistema de evaluación y seguimiento de los objetivos planteados. Así mismo se contará con la participación de los Grupos de Desarrollo Rural como concededores de los distintos territorios de los que forman parte.

3. La ERDR será de aplicación en los términos municipales del medio rural integrados en las zonas rurales establecidas en el artículo 11.

4. La ERDR será sometida a informe del Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, con carácter previo a su aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno.

5. La ejecución de la ERDR será a cargo del Gobierno regional en coordinación con las administraciones locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y con mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil.

6. En los ámbitos de la atención social, ambiental y territorial, la ERDR incidirá en explicitar medidas e instrumentos de acción positiva en la atención a las mujeres del medio rural, intensificando las medidas dirigidas a lograr la igualdad para aquellas personas en las que confluayan otras discriminaciones además de por razón de sexo, jóvenes, mayores, menores, migrantes, personas con discapacidad, en situación de dependencia y exclusión social.

Serán objetivo prioritario, asimismo, las zonas en riesgo de despoblación y escasamente pobladas, teniendo en consideración los objetivos y medidas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, así como las de afección medioambiental por externalidades negativas.

7. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación por razón de sexo, así como la incorporación de la perspectiva de género, serán un eje transversal en las disposiciones y redacción contenidas en la ERDR, así como en cualquier ámbito directo o indirecto vinculado a su aplicación.

8. Para la evaluación interna de la ERDR se establecerá un mapa de indicadores de seguimiento y evaluación de la misma, que integren indicadores de género.

9. La Estrategia Regional de Desarrollo Rural tendrá una vigencia de cinco años.

TÍTULO III

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS APLICABLES EN EL MEDIO RURAL.

Artículo 20. Colaboración Institucional.

1. La Administración Regional garantizará la participación del resto de las Administraciones Públicas, con presencia en el territorio regional, en la definición las políticas públicas dirigidas al medio rural y frente a la despoblación.

Asimismo, y con el fin de garantizar la igualdad efectiva de las personas del medio rural y la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, las Administraciones territoriales de la región definirán y consensuarán, el modelo de prestación de servicios públicos en el medio rural.

2. La Administración Regional promoverá la formalización de instrumentos de colaboración interadministrativa con las entidades locales y supramunicipales de la región, para el desarrollo de actividades de interés común en el medio rural, y en particular en materia de reto demográfico y frente a la despoblación.

3. En el marco previsto por el artículo 40.1 de la LO 8/1982, de 10 agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha propiciará la celebración de convenios interadministrativos con Comunidades Autónomas limítrofes, con el fin optimizar la gestión y prestación de servicios propios de competencia de las mismas en el medio rural.

Artículo 21. Contratación del Sector Público.

1. En el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el sector público de Castilla-La Mancha promoverá la utilización de la contratación pública como instrumento para luchar frente a la despoblación y promover el desarrollo territorial equilibrado de las comunidades rurales mediante el apoyo a las actividades socioeconómicas, el desarrollo empresarial, el fomento del empleo y el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles.

2. Los órganos del sector público regional, en el marco de la normativa vigente en materia de contratación pública, velarán por la incorporación en los pliegos de prescripciones técnicas, definidores de las obras, servicios y suministros que precisen para el ejercicio de sus competencias, de requisitos y características específicas sociales y medioambientales que redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada, así como productos amparados por figuras de calidad diferenciada regional, propiciando igualmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión forestal sostenible, las energías renovables y del ahorro energético.

3. En los contratos menores se invitará preferentemente a la participación de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y/o empresarios y empresarias autónomas, y especialmente a empresas de economía social y empresas creadas con el apoyo concreto de programas municipales de promoción del emprendimiento, con capacidad y solvencia adecuada para ejecutar las prestaciones de que se trate. Este criterio podrá utilizarse también en el procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos en los que la ley de contratos lo permita.

4. De acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación, los órganos del sector público regional establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas requisitos de capacidad y solvencia, y criterios de adjudicación que faciliten el acceso en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y a las empresas ubicadas en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

5. En la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación en los mismos de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales. Se establecerán requisitos de capacidad y solvencia adecuados al tamaño de los contratos y a las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas.

6. La Administración Regional, en colaboración con la Administración local, realizará acciones de apoyo, asistencia y formación continua en materia de contratación a pymes, micropymes, empresas de economía social, personas trabajadoras autónomas y entidades locales de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, priorizando a las mujeres en la promoción del emprendimiento y del autoempleo.

7. La Administración Regional, en el marco de la normativa vigente en materia de contratación, establecerá una estrategia de colaboración con las entidades locales para la celebración de acuerdos marco, sistemas dinámicos o centrales de contratación dirigidos a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Artículo 22. Ayudas y Subvenciones Públicas-

1. Las bases reguladoras y convocatorias de ayudas y subvenciones del Sector Público Regional incorporarán criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico para solicitantes de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, siempre que los referidos incentivos sean compatibles con el objeto, finalidad, intensidad y niveles máximos de las ayudas, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación en la materia, que podrán consistir en:

- a) Establecer líneas de ayudas específicas para estas zonas.
- b) Reservar una parte del crédito total de las convocatorias para proyectos procedentes de dichas zonas.
- c) Incrementos porcentuales de como mínimo un 20% de la intensidad de la ayuda, que podrá alcanzar hasta el 40%, en el caso de proyectos de zonas de extrema despoblación.
- d) Otorgar puntuación adicional en los procesos de concurrencia, de al menos el 20% del total de la puntuación prevista, que podrá alcanzar el 40%, en el caso de proyectos de zonas de extrema despoblación.

2. Asimismo, el Sector Público regional podrá condicionar la obtención de los incentivos adicionales indicados en el párrafo precedente, cuando el solicitante sea persona física, a la acreditación de la estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Artículo 23. Empleo Público.

1. La Administración Regional, en el marco de la legislación aplicable en materia de empleo público, adoptará medidas específicas con el objeto de propiciar en las zonas rurales, en función de su categoría de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la estabilidad del empleo público, preferentemente en el ámbito docente, sanitario y social. Asimismo, se adoptarán medidas específicas para puestos de difícil cobertura en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Dichas medidas podrán consistir en incentivos administrativos, profesionales o económicos para el personal que realice su actividad profesional y resida en zonas rurales, así como en otros incentivos que promuevan la provisión de los puestos de trabajo en dichas zonas.

2. Se impulsará desde la Administración autonómica la formación del personal del sector público autonómico en materia demográfica, considerándola un contenido transversal para su promoción profesional. En los programas de formación se incluirán actividades formativas y de sensibilización relacionadas con la materia.

Artículo 24. Simplificación normativa y administrativa.

La Administración Regional, promoverá en colaboración con todas las Administraciones Públicas, iniciativas de simplificación normativa y administrativa, con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas, que contribuyan a la revitalización económica y social de las zonas rurales, en particular de las escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Artículo 25. Administración Digital.

a) Se potenciará la administración digital como garantía de un acceso en igualdad a los servicios públicos y a las convocatorias de ayudas o subvenciones en el medio rural.

b) Se garantizará la accesibilidad a la tramitación telemática a la generalidad de la ciudadanía, a través del medio del que disponga.

c) Se garantizará la accesibilidad a personas con discapacidad, mediante herramientas tecnológicas.

d) Se garantizará la asistencia a todas las personas que tuvieran alguna dificultad para realizar la tramitación telemática.

e) Se facilitará la formación para las tramitaciones telemáticas.

f) Se favorecerá el acceso telemático de la ciudadanía a toda la información que disponen de ellos la Administración Regional, independientemente de donde residan.

g) Se fomentará, a través de los programas formativos para el personal de la Administración Pública, el uso de las nuevas tecnologías por las personas empleadas en el sector público de las entidades locales, preferentemente de quienes trabajen en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Artículo 26. Seguridad ciudadana.

La Administración Regional en el marco de la legislación aplicable en materia de seguridad ciudadana, colaborará con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con la policía local, en la garantía de los derechos, libertades y seguridad de las personas que habitan el medio rural y particularmente en el ámbito referente a la lucha, prevención y sensibilización contra la violencia de género.

Artículo 27. Acceso a Equipamientos y Servicios Básicos en el medio rural.

1. Los instrumentos de planificación derivados de esta Ley, así como el resto de planificación sectorial aprobada por la Administración Autonómica se orientarán a dotar al medio rural, de las infraestructuras, equipamientos públicos y servicios básicos necesarios para su desarrollo en condiciones de igualdad.

2. Las instalaciones o equipamientos de los servicios públicos básicos en cada zona rural se procurarán localizar en núcleos de referencia, que pueden complementarse con otros núcleos de apoyo, en atención a la cohesión funcional, tanto en su interior como con el resto del territorio.

En todo caso, se procurará que el tiempo de acceso desde cualquier núcleo hasta el núcleo de prestación del servicio básico no supere los 30 minutos.

Artículo 28. Colaboración Público-Privada.

Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha impulsarán la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico y potenciarán la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir el medio rural en un escenario de oportunidades.

CAPÍTULO II

GARANTÍA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MEDIO RURAL

Sección 1ª De la Garantía de Acceso en Igualdad.

Artículo 29. Disposiciones Comunes.

Para la consecución de un acceso en igualdad a los servicios públicos en el medio rural, la planificación que se realice en este ámbito contendrá medidas orientadas a garantizar:

- a) Un acceso adecuado a la población del medio rural a la oferta educativa.
- b) Una oferta sanitaria, que considere las peculiaridades del medio rural y su población.
- c) Un acceso a prestaciones y equipamientos de bienestar social, adaptado a las necesidades de las personas del medio rural.
- d) La oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para atender de modo efectivo y accesible a la demanda de uso de los servicios básicos, la movilidad y el desplazamiento de las personas que habitan el medio rural.
- e) La dotación de los servicios y equipamientos públicos de prestación obligatoria en el medio rural, su correcto mantenimiento y su mejora, en el marco de la normativa reguladora de la Administración Local, favoreciendo específicamente la prestación coordinada de servicios públicos entre municipios cercanos.
- f) La incorporación de la perspectiva de género en el acceso y diseño de todos estos servicios públicos, prestaciones y equipamientos en el medio rural.

Sección 2ª. Acceso a la Educación Pública en el Medio Rural.

Artículo 30. Acceso al Servicio Público Educativo.

Se garantizará una educación pública de calidad en el medio rural, y en particular se propiciará:

- a) Una ordenación territorial del servicio público educativo.

- b) La estabilidad en el diseño y funcionamiento del mapa y de la red de centros educativos insertos en el medio rural.
- c) La estabilización y mejora de las plantillas docentes, que redunde en la atracción de nuevos habitantes en el medio rural.
- d) Una adecuada escolarización y la mejora de los resultados educativos en el territorio rural, garantizando el acceso en igualdad a niveles superiores educativos, así como la igualdad de oportunidades con respecto a las personas que viven en el medio urbano.
- e) Adecuar las ratios a las circunstancias reales y específicas de los espacios rurales.
- f) Fomentar la utilización de materiales curriculares digitales, en la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos, en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
- g) Garantizar los apoyos necesarios para la inclusión educativa de todo el alumnado con atención a la Educación Especial, a las Enseñanzas de régimen especial, así como la formación de personas adultas.
- h) Consolidar la formación y participación de las comunidades educativas de ámbito rural fuera del centro educativo.
- i) Se fomentará la formación y apoyo institucional a los centros y asociaciones de familias del alumnado del medio rural para su implicación en la coeducación, la identificación de situaciones de violencia de género y la erradicación de cualquier grado de tolerancia social hacia la desigualdad entre mujeres y hombres.
- j) La mejora de las infraestructuras educativas, deportivas y tecnológicas vinculadas, con el objeto de ser parte integrante y sinérgica con las potencialidades del entorno rural y de la población en su conjunto.
- K) Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los valores del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como sensibilizar a la población en su conjunto.

Artículo 31. Mantenimiento de los Colegios Rurales.

La Administración Regional garantizará la apertura de colegios rurales, donde se imparten clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos y alumnas y, de forma excepcional se podrán mantener abiertos colegios con menos alumnado, con el objetivo de apoyar una escuela rural de calidad y contribuir a la fijación de la población en esos entornos.

Artículo 32. Medidas en materia de Prestaciones Complementarias.

1. La Administración Regional implantará medidas que favorezcan la igualdad en el acceso a la educación para el alumnado residente en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el fin de garantizar el transporte o, en su caso el acceso a una residencia escolar o universitaria, del alumnado desde su residencia, al centro de educación secundaria obligatoria y postobligatoria, así como a los centros de enseñanza artística y de idiomas.

2. La Administración Regional, en colaboración con las administraciones locales desarrollarán una red de comedores escolares, y aulas matutinas adaptados a la realidad de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

3. Las Consejerías competentes en materia de Educación y Agricultura desarrollarán programas conjuntos de fomento de alimentación saludable y compra de proximidad, apoyando a los agricultores y agricultoras, a la pequeña industria agroalimentaria y a las empresas de hostelería de la zona.

Artículo 33. Contrato Programa para Enseñanzas no obligatorias.

1. La Administración Regional implementará la figura del contrato programa de formación, para el alumnado con estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria.

2. El contrato programa, referido en el párrafo anterior, estará condicionado al mantenimiento de la estancia efectiva de la unidad familiar en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación mientras dure el periodo de formación, quedando exento de la devolución total de la cantidad

asignada si la persona beneficiaria, al finalizar los estudios, mantiene su estancia efectiva o comienza un proyecto de actividad económica en el municipio de origen o en un municipio perteneciente a una zona rural escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

3. Los contratos programa para enseñanzas no obligatorias serán compatibles con la obtención de cualquier tipo de beca al estudio.

Artículo 34. Adecuación de la oferta de Formación Profesional en las zonas rurales.

1. La Administración Regional tendrá en cuenta en la planificación de la oferta de formación profesional las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y, particularmente el vinculado al desarrollo rural para luchar frente a la despoblación, facilitando la participación de personas trabajadoras y de empresas del ámbito rural en dicha formación.

2. La Administración Regional impulsará el incremento de los programas de formación on line de calidad potenciando el acceso de la población del ámbito rural y especialmente de personas trabajadoras ocupadas para su cualificación y recualificación a través de otras metodologías de formación (teleformación y formación on line) garantizando la calidad de la misma.

Sección 3ª. Acceso a la Sanidad Pública.

Artículo 35. Garantía en la atención primaria y servicios sanitarios adecuados al medio rural.

1. Se potenciarán los centros de Atención Primaria, asegurando servicios sanitarios básicos de proximidad en cada zona rural, mediante una planificación con acciones positivas en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

2. En función de las circunstancias de cada zona rural:

a) Se atenderá específicamente los requerimientos de servicios médicos, cuidados de enfermería, incluidos los servicios de extracción de sangre y analítica de control, y atención a pacientes terminales.

b) Se incluirán programas específicos para garantizar una correcta atención sanitaria en el domicilio, especialmente a las personas de edad avanzada o con enfermedad crónica, ofreciendo la prestación de servicios de fisioterapia.

c) Se desarrollarán programas de autoayuda sanitaria dirigidos a personas, que incluirán líneas de subvención y convenios específicos.

3. Se favorecerá el envejecimiento saludable y activo de la población rural como vía principal de lucha contra la pérdida de funcionalidad y autonomía y la prevención de la dependencia.

Artículo 36. Garantía de acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias.

1. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha diseñará una red de puntos de atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se encuentre a menos de 30 minutos de aquellos durante las 24 horas del día.

2. Se garantizará el servicio de transporte sanitario terrestre o aéreo, o la combinación entre ambos, asistido o no asistido, según lo requiera la situación clínica de los pacientes que permita realizar la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias durante las 24 horas con la misma calidad y alcance para todos los núcleos de población de la región.

Artículo 37. Garantía de citas y coordinación de horarios.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará a sus sistemas de citación de pacientes, tanto en atención primaria como en especializada, los mecanismos necesarios tendentes a coordinar la asistencia a las consultas y pruebas diagnósticas con los horarios de los servicios de transporte público.

Artículo 38. Asistencia farmacéutica en el ámbito rural.

La Administración Regional promoverá una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de formar singular, se arbitrarán mecanismos que faciliten la misma en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación donde no exista oficina de farmacia.

Artículo 39. Programa de avances tecnológicos en la atención médica en el ámbito rural.

Se diseñará un programa tecnológico de incorporación de avances, y en particular, de la telemedicina que propicie la atención específica y adecuada a las circunstancias de la población y del territorio rural en materia de geriatría, atención psicológica y pediatría. Igualmente se aprovechará el potencial de salud digital para responder de manera efectiva a las nuevas necesidades de salud y proporcionar una atención más centrada en el paciente y la paciente.

Sección 4ª. Acceso Público al Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia y servicios en materia de igualdad.

Artículo 40. La Atención Social y servicios en materia de igualdad.

Se adecuará la prestación de la atención social a las necesidades de las personas que residen en el medio rural, mediante las siguientes medidas:

a) Acceso a las prestaciones y servicios incluidos en el catálogo de prestaciones de servicios sociales y de atención a las personas en situación de dependencia en condiciones de equidad, de acuerdo con lo que se establezca en el mapa de recursos de servicios sociales, que habrá de tener en cuenta las necesidades de las personas que viven en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

b) Garantizar la atención a las necesidades básicas de las personas, así como el acceso a la información, orientación y valoración de la situación social, a través de la red pública de servicios sociales de atención primaria con la participación de las entidades locales y, en su caso, con la colaboración de las entidades sociales del tercer sector.

c) Promover la atención en el entorno social habitual, impulsando el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia para atender las nuevas necesidades emergentes en el medio rural, incrementando la oferta de servicios para que las personas mayores permanezcan con una mayor calidad de vida en el domicilio. En colaboración con las entidades locales se prestarán de forma flexible y personalizada otros servicios de proximidad complementarios, como el acompañamiento, las comidas o la lavandería a domicilio y la participación en las actividades sociales que se realicen en la comunidad.

d) Garantizar el acceso a una atención multidisciplinar especializada a las mujeres del medio rural a través de los Centros de la Mujer distribuidos a lo largo de la región.

Artículo 41. La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

La Administración autonómica garantizará la atención a las personas que residen en el medio rural, que se encuentran en situación de dependencia, promoviendo el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, desarrollando las siguientes actuaciones:

a) Favorecer la creación de servicios que faciliten la atención en el domicilio y en el entorno social más próximo, estableciendo en su caso servicios itinerantes que faciliten el acceso a los mismos a las personas en situación de dependencia.

b) Impulsar los servicios de teleasistencia y atención domiciliaria, así como la asistencia personal para las personas en situación de dependencia que no dispongan del suficiente apoyo familiar.

c) Facilitar el acceso a los servicios que ofrezcan los centros residenciales ubicados en el municipio o en municipios próximos para personas en situación de dependencia que no sean residentes, con criterios de acción positiva para las que residen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación: servicios de terapia ocupacional, fisioterapia, centro de día, comidas, lavandería, etc.

d) Promover y hacer efectiva la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia con el Sistema de Salud, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, para garantizar una atención integral y la continuidad de cuidados a la persona, independientemente del municipio en el que se resida.

Artículo 42. La atención y el cuidado de las personas mayores.

La Administración Regional garantizará la atención y el cuidado a las personas mayores que viven en el medio rural, especialmente en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, para atender sus necesidades básicas y ofrecerles el apoyo necesario para promover su autonomía personal a través de las siguientes actuaciones:

- a) Facilitar la atención a las personas mayores que viven solas, favoreciendo la atención personalizada e integral en el proceso de soledad. Asegurando el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural, especialmente las que vivan solas o en domicilios aislados, con la instalación de terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación.
- b) Empoderar a las personas mayores garantizándoles programas y actividades para el desarrollo de un envejecimiento activo y un entorno de bienestar en que puedan aportar sus conocimientos y valores.
- c) Desarrollar la capacitación digital de la población mayor de 55 años y el acceso a las tecnologías de la comunicación para reducir la brecha digital generacional y la brecha digital de género y favorecer el desarrollo de procedimientos y actividades digitales.
- d) Las Administraciones Públicas impulsarán el desarrollo de servicios relacionados con el envejecimiento de la población, como una oportunidad de desarrollo económico y de generación de empleo en el medio rural, contribuyendo con ello a activar la economía, fijar población.
- e) Empoderar a las mujeres mayores facilitándoles herramientas para la identificación y la prevención de la violencia de género y garantizarles la atención integral a través de los Centros de la Mujer.

Artículo 43. Recursos residenciales.

La Administración Regional promoverá la activación de recursos residenciales adaptados al medio rural, mediante las siguientes medidas:

- a) La dotación y ordenación de recursos de atención a las personas mayores y en situación de fragilidad psicosocial o dependencia se realizará contemplando acciones positivas para las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, para lo cual se diseñarán recursos adaptados a las

características y necesidades de las mismas, que permitan, en su caso, integrar en un mismo dispositivo recursos diversos, para optimizar el uso de los servicios y su eficiencia.

b) Se garantizará el acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para que las personas mayores puedan permanecer en su entorno y evitar el desarraigo.

c) El sistema de concertación social de la Administración Regional contemplará medidas de acción positiva hacia los centros o recursos.

d) Se favorecerá la adaptación o la creación de nuevos servicios adecuados para atender las necesidades específicas de las personas mayores que viven en municipios pequeños o afectados por la despoblación, como centros multiservicios, unidades específicas de alojamiento y convivencia, viviendas con apoyos o supervisadas, servicios itinerantes y cualquier dispositivo que cuente con la preceptiva regulación y la correspondiente autorización para su puesta en funcionamiento.

e) Se activarán otros tipos de residencia o convivencia en el ámbito rural para las personas mayores que tienen dificultades para permanecer en su domicilio o carecen de este o no reúne las condiciones básicas de habitabilidad o accesibilidad, como son las viviendas tuteladas o colaborativas, las pequeñas unidades de convivencia o las familias acogedoras.

Artículo 44. La inclusión social de las personas con discapacidad.

Se promoverá la atención a las personas con discapacidad en el medio rural mediante la realización de las siguientes actuaciones:

a) Fomentar la atención en los entornos más inmediatos mediante la implementación de programas de apoyo a familias, la atención en entornos naturales o la itinerancia de servicios como fórmulas para paliar la desventaja social de las personas con discapacidad. Igualmente se promoverá un medio rural inclusivo mediante la accesibilidad a los servicios a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la teleintervención.

b) Se establecerán programas para facilitar la accesibilidad en la vivienda habitual y el equipamiento de los hogares para la adaptación a las

necesidades de las personas con discapacidad, y la tecnológica encaminada a mitigar la inseguridad de la soledad, garantizando la atención personalizada a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.

Sección 5ª. Acceso al Transporte Público en el Medio Rural.

Artículo 45. Transporte sensible a la demanda.

1. El Transporte Público de personas viajeras en el medio rural se prestará principalmente a través del transporte sensible a la demanda, sin menoscabo de la existencia de transporte regular de ámbito superior al comarcal y del transporte discrecional.
2. La Administración Regional establecerá un sistema de transporte sensible a la demanda que tenga la máxima cobertura para la población a un precio asequible, que permita el acceso a los servicios y actividades ofrecidas en distinto municipio y que facilite el desplazamiento a personas mayores o con problemas de movilidad mediante vehículos adaptados.
3. En las zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación y zonas rurales intermedias, una vez implantado el transporte sensible a la demanda, se procederá a la adaptación de los contratos de concesión de servicio público regular de uso general de personas viajeras en cuanto a las rutas, calendarios y horarios.
4. La Administración Regional promoverá la implantación de un sistema tecnológico y telefónico de pre-contratación que garantice la reserva de las plazas, así como la gestión y control de incidencias, y de información a tiempo real de los servicios.
5. La Administración Regional otorgará el título habilitante de transporte sensible a la demanda de competencia autonómica.

TÍTULO IV
COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL DEL MEDIO RURAL
CAPÍTULO I
COHESIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL.

Artículo 46. Fomento y Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural.

1. En el marco de las actuaciones en materia de vertebración del territorio, contemplados en las políticas públicas de incentivos a la actividad económica regional, su programación, y en especial la programación de fondos estructurales y de inversión europeos y de Inversiones Territoriales Integradas, o de otras acciones integradas en respuesta a necesidades concretas de los territorios, se incidirá en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

2. Se promoverá e incentivará la diversificación económica en el medio rural, con medidas transversales que tengan por objeto:

a) Establecer actuaciones específicas en el marco de las acciones cofinanciadas por fondos procedentes de la Unión Europea, y en particular las acciones integradas en respuesta a las necesidades concretas de los territorios rurales, atendiendo preferentemente a las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

b) Establecer actuaciones concretas de promoción de iniciativas económicas locales procedentes de colectivos específicos, bajo la base del enfoque territorial y los mecanismos participativos.

c) Gestión y ejecución de programas de empleo específicos destinados a colectivos de determinados sectores de actividad, o cualificación o cualesquiera otros requisitos que fueran considerados imprescindibles para la puesta en marcha de proyectos empresariales o planes concretos dirigidos a la lucha contra la despoblación, fijación de la población en zonas rurales o desarrollo estratégico de determinados territorios.

d) Apoyar al sector del comercio en el medio rural, así como la modernización de los equipamientos públicos comerciales, prestando una atención especial a las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de

despoblación, así como a las ferias y venta ambulante o no sedentaria, en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

e) Fomentar el turismo rural en todos sus ámbitos, a través de una adecuada ordenación de la oferta y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de un turismo sostenible.

f) Incentivar el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de los recursos naturales disponibles en la región, como los productos forestales, orientando su rentabilidad hacia la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la conservación del patrimonio natural y el paisaje, la sostenibilidad del capital natural.

g) Fomentar la Economía Social, con el fin de promover, crear y consolidar empleo inclusivo en el medio rural.

Artículo 47. Creación y Mantenimiento del Empleo en el Medio Rural.

Con el fin de impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, en especial para mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, particularmente en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se articularán las siguientes medidas:

a) El apoyo económico y de acompañamiento a la creación de empresas, al autoempleo y al empleo en cooperativas y demás formas jurídicas que conforman la economía social, singularmente en los sectores de actividad económica relacionados con el uso de nuevas tecnologías y con prácticas innovadoras en materia medioambiental. Especialmente apoyar el cooperativismo y las redes de mujeres rurales con la finalidad de promover una representación equilibrada de mujeres y hombres.

b) Desarrollar un programa “Retorno del Talento Interno”, para facilitar a las personas castellano-manchegas, con titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad, que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en nuestra región, el retorno a las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

c) El mantenimiento de puestos de trabajo en sectores productivos especialmente significativos en el medio rural, compaginando las fuentes

tradicionales de empleo rural con una nueva empleabilidad en sectores emergentes.

d) El fomento de políticas activas de empleo que contribuyan a la mejora constante de la empleabilidad de las personas en el medio rural y la reducción de la temporalidad y parcialidad, así como la responsabilidad social y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

e) Desarrollar programas de empleo específicos dirigidos a la lucha contra la despoblación, fijación de la población o desarrollo estratégico.

f) Potenciar la formación profesional para el empleo a fin de mejorar la cualificación de la población del medio rural, a través de la formación presencial con una ratio reducida, de la tele-formación, y de las aulas móviles y virtuales, así como los programas que combinen la formación y el empleo ligados a la actividad empresarial o sectores emergentes, garantizando la prestación de servicios en el territorio y la recualificación profesional de sus habitantes, priorizando, entre otros, la formación y capacitación en servicios de proximidad y de atención a personas dependientes o en situación de vulnerabilidad.

g) Garantizar la orientación profesional de todos sus habitantes mediante un sistema adaptado al entorno rural con un servicio de proximidad y una metodología flexible que permita aprovechar los yacimientos de empleo y la sostenibilidad de estas zonas y con especial atención a las iniciativas de autoempleo.

h) El diseño de actividades de información y formación que faciliten la implicación de las personas que habitan el medio rural en el turismo geológico, ecológico, minero y otros aprovechamientos culturales endógenos.

i) Potenciar la colaboración con las entidades locales para acercar los servicios de empleo de la Comunidad Autónoma, a las personas residentes en las zonas rurales de la región.

j) Promoción de la formación profesional para el empleo, en particular para mujeres y personas mayores de 50 años, con especial incidencia en las zonas rurales y en las más afectadas por el reto demográfico, para reorientar su cualificación profesional.

Artículo 48. Apoyo a la promoción económica y empresarial en el medio rural.

Con el fin de impulsar la promoción de actividades y empresas en el medio rural, se propiciará el mantenimiento y la mejora de las actividades económicas, compatibles con un desarrollo sostenible, en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, mediante las siguientes actuaciones:

- a) Incentivar aquellas actividades y sectores económicos que contribuyan a la modernización y diversificación de la estructura económica regional.
- b) Establecer ayudas específicas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, mediante la financiación de actuaciones vinculadas a establecimientos comerciales.
- c) La Consejería competente en la materia y el sector público regional promoverán programas de forma directa o mediante la colaboración con entidades financieras que faciliten la financiación a través de préstamos, avales o cualesquiera otras figuras financieras dirigidos a las iniciativas empresariales promovidas en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
- d) Mejorar la red de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, consolidando los proyectos de emprendimiento.
- e) Potenciar el acceso a los mercados internacionales de las pymes ubicadas en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
- f) Potenciar la digitalización en todos los ámbitos de la empresa, que permita competir mejor en los mercados internacionales globales y la generación de empleo de calidad.
- g) Promover el relevo generacional para fomentar el mantenimiento y asentamiento de nueva población joven en el medio rural.
- h) Promover medidas para evitar el éxodo rural de las mujeres y para mejorar su acceso a la formación y al empleo en las zonas rurales.
- i) Propiciar el mantenimiento del tejido empresarial, desarrollando programas de ayuda para la sucesión empresarial en el medio rural y para el relevo generacional.

j) Fomentar la actividad turística sostenible, incentivando aquellas iniciativas que contribuyan a la preservación de los elementos naturales y culturales propios de cada zona, incluidas sus infraestructuras y su patrimonio ecológico, geológico, histórico o inmaterial.

k) Promover iniciativas para fomentar la localización de actividades industriales en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Artículo 49. Programas de financiación a la actividad empresarial.

1. La Consejería con competencias en materia de incentivación empresarial podrá establecer para los proyectos que generen actividad económica y empleo en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, un sistema de complemento a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la Administración General del Estado, contemplando los límites de ayuda fijados en el mapa de ayudas regionales de la Unión Europea.

2. El Sector Público regional, arbitrará instrumentos financieros específicos para el apoyo a las iniciativas, que se implementen en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Dichos Instrumentos deberán estar alineados con las disposiciones comunitarias en esta materia.

Artículo 50. Apoyo al Sector agrícola, ganadero y forestal.

Con la finalidad de apoyar una actividad agrícola, ganadera y forestal que se equipare en su rentabilidad a la de otros sectores económicos, las actuaciones de la Administración Regional irán orientadas a:

a) Potenciar la mejora de la rentabilidad y la creación de empleo, de la actividad agrícola, ganadera y forestal, promoviendo el desarrollo, la consolidación y el mantenimiento de explotaciones y modelos de gestión adecuados que garanticen su viabilidad y sostenibilidad.

b) Rejuvenecer el sector agrícola, ganadero y forestal, para lo cual la Administración Regional velará para que el relevo generacional esté incorporado en todas sus actuaciones. Se fomentará la incorporación de jóvenes al sector agrario y su relevo generacional, en el marco de las distintas medidas sectoriales que desarrollen la política agraria de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, incorporándose como criterio de

prioridad la condición de ser joven agricultora o agricultor titular de explotación o en proceso de acceso a la titularidad de la misma, así como la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

c) La planificación de la política agraria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en atención a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

d) Potenciar la modernización de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales económicamente viables, con el fin de mejorar su competitividad, con especial interés en las explotaciones propiedad de titulares jóvenes y que mantengan su estancia efectiva en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

e) Potenciar el sostenimiento de las explotaciones agrarias de carácter familiar y profesional, así como mejorar de la calidad de vida de las personas trabajadoras agrarias, tanto titulares como personas asalariadas de las explotaciones agrarias.

f) Fomentar la diversificación en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de las explotaciones, buscando alternativas económicas, con especial incidencia en la transformación y venta directa de productos propios.

g) Desarrollar fórmulas que aseguren el mantenimiento de explotaciones agrarias de dimensiones que las hagan económicamente viables y el fomento de explotaciones prioritarias. En concreto, se impulsarán los trabajos orientados a mantener o, en su caso, aumentar la superficie de las explotaciones agrarias con el fin de que estas tengan una dimensión adecuada, así como a favorecer su transmisión a personas profesionales del sector; asimismo se potenciará la concentración parcelaria de manera compatible con los valores naturales existentes, la transmisión de tierras entre profesionales y el desarrollo de infraestructuras de apoyo que contribuyan al reforzamiento estructural de una explotación.

h) Garantizar que las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales desarrollen modelos de producción compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad agraria. En concreto, las relativas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental y, en el

ámbito territorial, las relacionadas con su valor para preservar el equilibrio territorial y conservar el tejido socioeconómico de los espacios rurales. Todo ello buscando un enfoque multifuncional de la agricultura y el uso y aprovechamiento de los montes.

i) Impulsar las energías renovables en la agricultura, ganadería y sector forestal.

j) Fomentar la formación profesional de titulares y personas trabajadoras de las explotaciones agrarias, pudiendo contar para ello con los centros educativos específicos de enseñanzas agrarias.

k) Favorecer el acceso a la financiación en condiciones favorables de los proyectos que impliquen la mejora de las explotaciones agrarias y forestales y su competitividad mediante el impulso de programas de financiación a través de instrumentos financieros desde el Sector Público Regional.

Artículo 51. Apoyo a la Mejora de la Posición de los Agricultores y Agricultoras en la Cadena de Valor.

En atención al valor fundamental que el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha supone para la economía de la región, la Administración Regional fomentará las siguientes actuaciones:

a) La agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la integración de las entidades asociativas agroalimentarias, la integración de las mismas en estructuras empresariales más dimensionadas y el asociacionismo tanto de los agricultores y las agricultoras, como de sus entidades asociativas.

b) La sostenibilidad integral de las industrias, en sus ámbitos económico, social y medioambiental.

c) La certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas.

d) La producción ecológica.

e) Los productos acogidos a regímenes de calidad diferenciada.

f) El incremento de la dimensión empresarial.

g) La participación de los agricultores y las agricultoras en la cadena de valor.

- h) El fomento de los canales cortos de comercialización.
- i) El reparto a domicilio de productos agroalimentarios a través de los pedidos telefónicos y on-line.
- j) Las inversiones en comercialización.
- k) La innovación y la implantación de nuevos productos agroalimentarios y nuevas presentaciones.
- l) La introducción de las tecnologías digitales en las empresas.
- m) La mejora de la transparencia y la información de la cadena alimentaria.

Artículo 52. Puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales.

1. La Consejería competente en materia forestal promoverá la puesta en valor de las externalidades o servicios de los ecosistemas forestales con el objetivo de incrementar el valor y la renta de los montes en el marco de las políticas internacionales y nacionales de lucha contra el cambio climático, conservación de la biodiversidad y de los compromisos de responsabilidad ambiental y social corporativa del sector privado.

2. A los efectos de esta ley, las siguientes externalidades o funciones de los montes son servicios esenciales de los ecosistemas forestales y tienen el carácter de interés público:

- a) La conservación de la biodiversidad y su capacidad de refugio a la fauna, en especial cuando se trata de las especies catalogadas.
- b) La capacidad de fijación de carbono y por ende su contribución como sumidero de CO₂ -gas de efecto invernadero-.
- c) La capacidad de conservación del suelo y la protección ante el impacto de los procesos erosivos.
- d) La contribución a la regulación hídrica y a la calidad de las aguas superficiales e infiltradas, y por tanto su contribución esencial a los usos del agua en la industria, la agricultura y el consumo humano.
- e) La contribución a la diversificación y belleza del paisaje.
- f) El valor histórico y cultural de los montes para la población.

g) El uso recreativo compatible con la conservación de sus atributos naturales y culturales.

h) El valor científico asociado a los elementos que albergan en su estado actual, así como su evolución natural.

3. Con el objetivo de garantizar la funcionalidad de los servicios de los ecosistemas forestales de la región la Consejería competente en materia forestal velará por el desarrollo de las medidas e incentivos necesarios que garanticen la internalización progresiva de los servicios ecosistémicos de los montes públicos y privados en la economía de la región, para corregir los fallos fiscales y de mercado que pudieran provocar un menoscabo en su valor holístico y en consecuencia su deterioro.

4. La Consejería competente en materia forestal acometerá el cálculo, la contabilidad y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales de la región incorporando o desarrollando las metodologías adecuadas para su cuantificación, compensación y comercialización en el marco de los protocolos nacionales e internacionales regulados o, en su defecto, a través de esquemas voluntarios transparentes y creíbles.

5. A efectos de su contribución para la mejora y gestión de los montes, se creará un nuevo fondo finalista cuyo sistema de contribución y gestión tendrá las mismas reglas que las que se aplican al fondo de mejoras, en este caso, a partir de los ingresos o rendimientos que se puedan obtener a partir de los servicios ecosistémicos generados en los Montes de Utilidad Pública.

Artículo 53. Apoyo a la demanda de productos agroecológicos y de calidad diferenciada de la región

La Administración Regional apoyará las iniciativas de consumo responsable y sostenible en el medio rural, que contribuyan al consumo de proximidad y de productos locales, agroecológicos y de calidad diferenciada. Al respecto, regulará y promoverá la soberanía y la sostenibilidad alimentarias, así como la creación de grupos de consumo en el ámbito de un consumo colaborativo, inclusivo, social y solidario.

Artículo 54. Apoyo a la comercialización de los productos forestales de la región.

Para impulsar y garantizar el uso múltiple y sostenible de los recursos forestales de Castilla-La Mancha, la Administración Regional fomentará las siguientes actuaciones:

- a) El desarrollo de la cadena de valor monte-industria-mercado- persona consumidora final, y la trazabilidad la cadena de custodia.
- b) El apoyo a la producción de resinas naturales, y otros productos forestales no maderables en su caso, con el objetivo de garantizar la rentabilidad de la explotación resinera y con ello el empleo rural en este sector.
- c) La introducción de nuevas tecnologías en el sector.
- d) La introducción y fomento de herramientas de gestión sostenible en el sector cinegético y piscícola, incluida la actividad productiva en centros de cría de especies cinegéticas y centros de acuicultura.

Artículo 55. Apoyo a la bioeconomía.

En atención al potencial que el sector de la bioeconomía en Castilla- La Mancha supone para la economía de la región, la Administración Regional fomentará las siguientes actuaciones:

- a) La creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, atrayendo inversión local e internacional.
- b) La maximización del potencial de la bioeconomía en el ámbito rural, fomentando la presencia en nuevos mercados y la demanda de este tipo de recursos y productos.
- c) La creación del entorno adecuado para las empresas, conectando el talento local con las empresas.

Artículo 56. Acceso a Servicios Bancarios en el Medio Rural.

1. En el marco de la legislación del Estado, las entidades financieras que operen en Castilla-La Mancha deberán atender en sus estrategias comerciales y de función financiera el acceso de la población de Castilla-La Mancha a servicios bancarios a través de oficinas, cajeros, agentes financieros, oficinas móviles, entre otros medios, con la finalidad de aportar soluciones a aquellas poblaciones que no tengan acceso a estos servicios bancarios.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha podrán suscribir acuerdos con las entidades financieras para facilitar el acceso a los servicios financieros de las personas que viven en el medio rural, especialmente a los medios de pago en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Artículo 57. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación.

1. La promoción y el fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en el medio rural constituirán una prioridad para la Administración Regional.

2. La actividad investigadora ofrecerá una respuesta adecuada y permanente a los retos científicos, tecnológicos, económicos y sociales a los que se enfrentan los sectores productivos regionales, como el de la bioeconomía, el agrario y agroalimentario, forestal, o de los servicios sociales, y transferirá soluciones prácticas, innovadoras y eficientes a la actividad económica productiva que mejoren la competitividad de dichos sectores.

3. La Agencia Regional de Investigación, o el órgano que asuma sus funciones, impulsará un centro que coordine la investigación sobre despoblación, los retos demográficos y las oportunidades en el medio rural, con la finalidad de desarrollar estudios en aquellos sectores que sirvan para reactivar económica y socialmente los territorios con baja densidad de población en la Región.

CAPÍTULO II

COHESIÓN SOCIAL

Artículo 58. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Con el fin de favorecer la permanencia y el asentamiento de familias y jóvenes en el medio rural, la Administración Regional extenderá de modo progresivo los servicios de atención a menores de 0 a 3 años, personas mayores y personas dependientes, con la participación de otras administraciones y el impulso de iniciativas privadas.

Artículo 59. La Atención a la Infancia y el Apoyo a las Familias.

La Administración Regional garantizará una adecuada atención a la infancia, reforzando el papel de las familias en el medio rural como instrumento para evitar la despoblación e incrementar la nueva implantación de grupos familiares en esos entornos, para lo cual se impulsarán las siguientes medidas:

- a) Favorecer y velar por las condiciones de vida de los niños y niñas en el entorno rural; con especial atención a la infancia que vive en familias más vulnerables, y promover la itinerancia y el acceso a través de las nuevas tecnologías a los programas de apoyo a las familias, para favorecer la atención en el medio rural.
- b) Fomentar políticas de apoyo a las familias para posibilitar, a las personas que lo deseen, formar una familia en un entorno rural favorable con la adopción de políticas transversales que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.
- c) Promover el acceso al teletrabajo y a las TIC de las familias acogedoras que residan en el ámbito rural, para favorecer su permanencia en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación rural, y garantizar el seguimiento y apoyo a esas familias a través de la itinerancia y la atención telemática, fomentando así el acogimiento familiar de niños y niñas en el medio rural.
- d) Favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de jóvenes ex tutelados.

Artículo 60. Inclusión Social.

La Administración autonómica orientará su actuación en el medio rural de acuerdo con los siguientes principios:

a) Promover la realización de proyectos de inclusión social de ámbito local o supramunicipal para atender las necesidades específicas de las personas o colectivos con carencias o con dificultades de integración social. Se promoverá la realización de proyectos de intervención social o comunitaria, así como actuaciones de apoyo en el medio rural, facilitando de manera coordinada la atención social, la educación, el acceso a la vivienda y la información y orientación para el empleo.

b) Adecuar el sistema de ayudas de emergencia social para responder a las circunstancias sobrevenidas que incidan sobre personas en situación de dificultad económica y/o social, para que se amplíe la cobertura más allá de las familias en situación de pobreza severa. Se apoyará a las familias en situación de riesgo o especial vulnerabilidad, para evitar su entrada en circuitos de exclusión social.

Artículo 61. Vivienda.

Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas que viven en el medio rural, especialmente a quienes quieran residir en los núcleos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, la Administración Regional contemplará medidas y actuaciones dirigidas a:

a) Creación de una Oficina de fomento de la vivienda rural, encargada de gestionar una Bolsa de Vivienda Rural, que permita conectar a las personas demandantes de vivienda con la oferta existente.

b) Establecer criterios de acción positiva a las personas demandantes de vivienda de protección pública, con estancia efectiva en zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, así como para aquellas personas que quieran fijar su residencia efectiva en las zonas descritas.

c) Crear una tipología propia de Vivienda Rural Protegida, cuyas características, que serán fijadas reglamentariamente, contemplarán las peculiaridades arquitectónicas del ámbito rural.

d) Fomentar la reutilización de viviendas ya existentes, la rehabilitación de viviendas y edificios, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas

existentes, la preservación de la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de rehabilitación de los municipios rurales con objeto de recuperar y conservar el patrimonio rural.

Con esta finalidad, las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha impulsarán los estudios que determinen las áreas rurales que requieran de la aplicación del procedimiento de ejecución en actuaciones edificatorias, previsto en los artículos 132 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, o precepto legal que lo sustituya.

e) Establecer un programa de financiación para la construcción o rehabilitación de vivienda habitual, tanto en propiedad como en alquiler.

Artículo 62. Promoción de la Cultura.

1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha impulsarán planes de acción para la mejora del acceso a la cultura en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, mediante la creación de redes y plataformas con contenidos culturales específicos, fomentando la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. La Consejería con competencias en materia de cultura favorecerá el desarrollo de los recursos culturales ubicados en estas localidades, para su puesta en valor desde el punto de vista cultural, patrimonial y de generación de empleo, y promoverá acciones de profesionalización entorno a las industrias culturales con especial incidencia en el entorno rural.

3. Con el objetivo de implementar los servicios culturales en el medio rural, se fomentará el servicio bibliotecario en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, incluyendo medidas tendentes a la extensión del modelo de biblioteca pública de doble uso, escolar y pública, al incremento de los servicios de bibliobús, y programas de envío a domicilio de fondos bibliográficos de las Bibliotecas Públicas, así como a propiciar el acceso a servicios virtuales de la Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.

Artículo 63. Fomento del Ocio Responsable

Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha impulsarán programas y actividades de ocio responsable libre de violencia de género, accesibles e inclusivos en los núcleos de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, con la finalidad de propiciar el disfrute del tiempo libre, así como de una mayor integración social, implementando proyectos con base en las tecnologías de la información y la comunicación, y acuerdos con las distintas plataformas de contenidos audiovisuales.

Artículo 64. Recursos públicos de información y protección de los derechos de las personas consumidoras

La Administración Regional garantizará el acceso universal a los recursos públicos de información y protección de las personas consumidoras en el medio rural, a través de los dispositivos de atención telepresenciales que eviten desplazamientos innecesarios para poder plantear sus consultas y reclamaciones.

Artículo 65. Medios de comunicación social.

La Administración Regional impulsará medidas que favorezcan el acceso de la ciudadanía del medio rural a una información veraz y que propicie los intercambios humanos, culturales y económicos de la población del medio rural.

A estos efectos la Administración Regional habilitará mecanismos que impulsen la radiodifusión, televisión y cualquier otro medio de comunicación social en el medio rural, colaborando al efecto con los diferentes medios de comunicación social con presencia en el territorio regional.

CAPÍTULO III

COHESIÓN TERRITORIAL

Artículo 66. Instrumentos de ordenación territorial y urbanística

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se refieran a ámbitos territoriales afectados por los objetivos y fines de la presente Ley tendrán en consideración a éstos, debiendo propiciar además el uso racional de los recursos naturales, armonizar los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente y contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural, arquitectónico y del paisaje.

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

e) La cohesión territorial y económica, con especial incidencia entre la interacción entre los ámbitos urbanos y rural más próximos.

f) La preservación y fomento de las singularidades geográficas, ambientales, paisajísticas, económicas, sociales, demográficas y culturales del ámbito al que se refieran.

g) La integración de la perspectiva de género y la atención de las necesidades de la ciudadanía en general y en especial de menores, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores.

2. Sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones y en los términos señalados en la normativa de ordenación territorial y urbanística, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con los pequeños municipios de nuestra región en la elaboración y tramitación de sus planes

urbanísticos como instrumentos idóneos tanto para la correcta ordenación de su territorio como para su desarrollo.

Artículo 67. Infraestructuras del transporte.

Los instrumentos de planificación de las infraestructuras de transporte, incluirán programas específicos que garanticen la accesibilidad a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, mediante el acondicionamiento de la red existente y su adecuado mantenimiento, conservación y explotación.

Artículo 68. Fomento de las Energías renovables en el medio rural.

La planificación regional de esta materia en ámbito rural estará orientada al impulso y el equilibrio territorial del mismo, para lo cual se potenciará el uso de las energías renovables como elemento generador de riqueza, regulando a tal efecto medidas que tengan por finalidad:

- a) La producción de energía, aprovechando recursos generados en el sector agrícola y ganadero.
- b) La producción de energía a partir de la biomasa forestal, en particular la procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible.
- c) La producción de energía a partir de biocombustibles sostenibles.
- d) La producción de energías renovables para uso colectivo, térmico o eléctrico, y el desarrollo de sistemas o proyectos tecnológicos de reducción del uso de energías no renovables.
- e) La sustitución del consumo público y privado de energías no renovables, la reducción de las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, el mantenimiento y aumento de las prestaciones de la cubierta vegetal como sumidero de CO₂ y la adaptación al cambio climático.
- f) Fomento y tratamiento prioritario de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, que contribuyan con sus infraestructuras eléctricas a la expansión del tejido industrial y empresarial en el territorio de Castilla-La Mancha o a la consolidación del mismo, dimensionando dichas infraestructuras a efectos de posibilitar atender futuros suministros/demandas de energía para estos

finés en su zona de implantación. Se incluyen también en este apartado el fomento de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables vinculados a comunidades de energías renovables.

g) Priorizar en los programas, líneas de ayudas e incentivos económicos destinados al fomento de proyectos de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, a las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el fin de propiciar su transición energética y dar un tratamiento equitativo y solidario entre territorios en dicha transición.

Artículo 69. Eficiencia en el consumo de Agua.

Los objetivos de optimización del uso del agua, incluirán medidas que tengan por finalidad:

a) Impulsar una red de infraestructuras básicas de calidad teniendo en cuenta los principios de eficacia y eficiencia, que garantice el acceso de la población del medio rural, particularmente de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, a un servicio de abastecimiento de agua de calidad para el consumo humano y la actividad económica, así como el saneamiento y depuración de las aguas residuales.

b) La implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos por zonas rurales o mancomunidades de municipios, garantizando, la disponibilidad para el consumo en poblaciones.

c) El uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a las actuaciones de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético y al empleo de energías renovables, sin perjuicio del mantenimiento y apoyo a la conservación de los sistemas de regadío tradicional cuyos valores culturales justifiquen el mantenimiento de los mismos.

Artículo 70. Tecnologías de la información y la comunicación.

Los instrumentos de planificación potenciarán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el medio rural, previendo medidas destinadas a:

- a) Garantizar una conectividad digital fiable y de calidad para el 100% de localidades, de banda ancha y móvil, mediante redes de infraestructuras que permitan una adecuada transmisión de datos entre la ciudadanía, las empresas y la Administración, para alcanzar la igualdad de oportunidades y capacidades de acceso a las redes para todos los territorios, los grupos sociales y todas las empresas de la región.
- b) Promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios de red de banda ancha rápida y ultra rápida en cualquier zona o territorio de la región, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial.
- c) Garantizar el acceso a los medios de información y contenidos audiovisuales, tanto los que puedan ser en un formato conocido como la radio y la televisión, u otros formatos más novedosos como las actuales plataformas de contenidos audiovisuales en streaming o medios de comunicación digitales, a través de una conexión de banda ancha para garantizar la pluralidad.
- d) Mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en los diversos sectores de actividad económica en el medio rural, particularmente en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
- e) Impulsar la capacitación de la ciudadanía en competencias digitales en las zonas rurales, especialmente en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
- f) Promover la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de la información, mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones con la finalidad de reducir la brecha digital de género.

TÍTULO V

FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Artículo 71. Criterio general sobre financiación Institucional.

1. La financiación del desarrollo del medio rural y de la lucha frente a la despoblación vinculado a esta Ley corresponderá a la Administración Regional, coadyuvándose con fondos que sean de aplicación acorde al desarrollo de las políticas de cohesión de la Unión Europea, así como de los presupuestos de otras Administraciones Públicas.

2. Las actuaciones previstas en los instrumentos de planificación previstos en esta Ley se financiarán desde los distintos programas de ayudas institucionales previstos en cada ámbito sectorial, y se realizará acorde con los procedimientos administrativos y de control financiero vigentes.

3. Los presupuestos regionales recogerán, específicamente, los créditos destinados, en cada una de las secciones y programas, a la puesta en marcha de las actuaciones previstas en los instrumentos de planificación regulados en esta Ley y en todo caso se identificarán como orientados y priorizados al desarrollo del medio rural y frente a la despoblación.

4. Los instrumentos de planificación previstos en esta Ley incorporarán una memoria indicativa de la financiación asignada, en la que se explicita la fuente de financiación y en su caso, la cofinanciación en actuaciones conjuntas o dentro del ámbito de la elegibilidad respecto de los fondos europeos. Así mismo, habrán de explicitarse los objetivos asignados a cada una de las actuaciones y los indicadores que permitan medir del grado de cumplimiento de los mismos.

Artículo 72. Financiación desde los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros instrumentos de financiación de la UE.

1. Los Programas Operativos Regionales de Fondos Estructurales y de Inversión (EIE), y aquellos otros instrumentos financieros de la Unión Europea, destinarán una parte de sus recursos financieros a apoyar las actuaciones previstas en los Instrumentos de Planificación establecidos por esta Ley.

2. En el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), prioritariamente deberá atender financieramente a los ejes de actuación ligados a las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

3. La gestión de los Programas Operativos de estos fondos institucionales corresponderá al Departamento de Gobierno regional designado como Autoridad de Gestión, u Organismo Intermedio.

4. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá aplicar un enfoque integrado, bien para el conjunto, o una parte, de las zonas rurales de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea que resulte aplicable.

TÍTULO VI MEDIDAS TRIBUTARIAS FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Artículo 73. Medidas para la reducción de cargas impositiva en el medio rural.

1. Con la finalidad de revitalizar la economía de las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, en el ejercicio de sus competencias normativas en materia de tributos, establecerá beneficios fiscales específicamente dirigidos a las personas contribuyentes que residan en dichas zonas. Los citados beneficios podrán afectar tanto a los tributos propios como a los tributos cedidos.

2. En el caso de los tributos cedidos, los beneficios fiscales podrán consistir, entre otras medidas, tanto en el establecimiento de deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

TÍTULO VII

GOBERNANZA

Artículo 74. Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación.

1. Con el fin de garantizar la coherencia de la planificación realizada en el medio rural, se crea el Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación, como órgano de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales de la región.

Igualmente, a efectos de lograr una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones relativas al ámbito rural, que redunde en mejorar la efectividad de las políticas aplicables, el Consejo incorporará en su composición a los actores sociales y económicos más representativos del ámbito rural.

2. El Consejo actuará en cumplimiento de sus funciones en dos niveles:

a) A nivel Institucional como órgano encargado de:

1º) Promover la colaboración y el intercambio de información entre la Administración Regional, local, y provincial en la definición de las políticas de desarrollo rural y frente a la despoblación.

2º) Establecer mecanismos de cooperación y colaboración de las Administraciones territoriales, en el diseño y desarrollo de políticas públicas de Reto Demográfico y frente a la despoblación, así como para la prestación de servicios en el medio rural.

b) A nivel participativo, como órgano encargado de promover la participación de los actores sociales y económicos en la configuración de las políticas que afecten al mundo rural, aportando experiencias e iniciativas para la mejora de las condiciones de vida de la población del medio rural.

3. Su composición y funciones se determinará reglamentariamente, debiendo informar la ERDR y ERD, con carácter previo a su aprobación por Consejo de Gobierno.

Artículo 75. Gestión Pública y Gobernanza de los Instrumentos de Planificación de las Zonas Rurales.

Los instrumentos de planificación previstos en el artículo 17.1 de esta Ley regularán sus órganos de gobernanza, garantizando la participación efectiva de las entidades locales y de los actores económicos y sociales más representativos presentes en el territorio regional.

Disposición Adicional Primera. Creación de un Fondo para el Apoyo Financiero a Proyectos Empresariales en Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación.

1. Se autoriza la creación de un Fondo para el Apoyo Financiero a Proyectos Empresariales viables en Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación con una dotación inicial de 10.000.000 de euros, el cual podrá ser complementado con aportaciones de entidades públicas o privadas que formen o no parte del sistema financiero.

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 de esta ley, la gestión de dicho fondo se encomendará al Sector Público Regional con competencias en la creación de instrumentos financieros.

Disposición Adicional Segunda. Adaptación de la zonificación a los criterios de la Unión Europea.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno podrá adaptarse la tipología de las zonas rurales a las que hace referencia el artículo 11 de esta Ley, con el fin de mantener la coherencia y alineación con el Acuerdo de Aplicación del Mapa Regional de ayudas del Gobierno de España y la clasificación que a nivel NUTS 3, o cualquier otra que efectúe la Unión Europea.

Disposición Adicional Tercera. Proyectos prioritarios en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Los proyectos empresariales procedentes de zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, que formulen solicitud de declaración de proyectos prioritarios, tendrán la consideración de especial contribución a la

reactivación de la actividad económica, a los efectos previstos en el artículo 4.1 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios.

Disposición Adicional Cuarta. Adaptación de pliegos de condiciones en la contratación de los servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los pliegos de prescripciones técnicas que se aprueben por los órganos de contratación del sector público regional, con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, para la contratación de servicios de comunicación de voz, datos y similares, incorporarán:

a) la obligación por parte de las personas adjudicatarias de conectar por fibra óptica todos los edificios de su titularidad, a excepción de aquellos que por encontrarse ubicados en zonas aisladas requieran el estudio de alternativas para facilitar su conexión a las redes de telecomunicación.

b) la obligación de garantizar la conexión en movilidad a la red corporativa y aplicaciones de gestión, que utilizan las personas empleadas del Sector Público Regional, en todas las localidades de la región.

c) entre los criterios de adjudicación la mejora consistente en la conexión de los edificios de titularidad de las entidades locales de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación a las redes de telecomunicación.

Disposición Adicional Quinta. Encargos de gestión en montes públicos propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades locales.

1. La Consejería con competencias en materia de gestión forestal encargará a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha la ejecución de aprovechamientos forestales y tratamientos selvícolas, así como otro tipo de actuaciones de gestión definidas en los proyectos y planes de gestión forestal de los montes públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, inclusive la certificación de su gestión, con el objetivo de garantizar y poner en valor la gestión forestal social y ambientalmente responsable de manera ininterrumpida y efectiva, de acuerdo a la Planificación establecida para GEACAM, por parte de la Consejería.

La movilización de dichos recursos forestales responderá a los principios de eficiencia y eficacia, procurando que su clasificación, acopio y puesta en el mercado responda a las expectativas de calidad y mejor uso en la cadena de valor.

Todo lo anterior se realizará en consonancia con los objetivos de sostenibilidad, transición energética, economía circular y creación de economía en el medio rural, incluido la dinamización, colaboración y participación del sector forestal privado en dicha gestión forestal.

2. En el marco de lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos del sector público, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha quedará a disposición de los titulares de otros montes públicos de la región para desempeñar funciones análogas a las establecidas en el punto anterior, incluido la ejecución de las tareas definidas en los planes de mejora de dichos montes.

3. La Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha efectuará anualmente un informe que será remitido durante el primer trimestre del año a la Consejería con competencias en política y gestión forestal para su remisión al Consejo de Gobierno sobre los resultados obtenidos por la gestión de los montes y el destino de los recursos obtenidos durante el año anterior.

4. En aquellos casos en los que se considere necesario para una gestión más eficaz de los aprovechamientos de los montes propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha objeto de encargo conforme al apartado 1 anterior, la contratación de los mismos podrá llevarse a cabo por parte de la empresa pública GEACAM, conforme a los requisitos y con los límites establecidos en la legislación aplicable.

Disposición Derogatoria Única. Derogación Normativa

Quedan derogadas las disposiciones normativas de igual o inferior rango que se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en esta ley.

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.

El apartado 4 del artículo 11, de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del ente Público de Radio-Televisión de Castilla la Mancha:

“4.- El Consejo de Gobierno, a propuesta del Director general y de acuerdo con el Consejo de Administración, podrá acordar la creación de sociedades filiales en las áreas de comercialización, producción, comunicación, agencias, radiodifusión, televisión de ámbito local, medios escritos y digitales u otras análogas para conseguir una gestión más eficaz. La Constitución y capital de estas sociedades estarán sujetos a las limitaciones que legalmente les sean aplicables, debiendo mantener una participación mayoritaria en las mismas.”

Disposición Final Segunda. Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha.

Se modifica el título y contenido del artículo 17, de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y la Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 17. Sostenibilidad energética del sector público regional.

1. En los nuevos edificios y construcciones propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades que integran el sector público regional, así como los que en el futuro se adquieran o construyan, sin perjuicio de ajustarse a las exigencias básicas de ahorro y eficiencia energética previstas en la normativa técnica de la edificación, se potenciará la generación de energía eléctrica en los propios edificios a efectos de fomento del autoconsumo, así como el uso de renovables generadas en el edificio o su entorno cercano.

Asimismo, en los edificios existentes propiedad del sector público regional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y previo estudio individualizado realizado al respecto, se procederá a la implementación progresiva, dentro del horizonte de la planificación energética regional, de un programa de mejora de la eficiencia energética, al objeto de la

implantación de medidas de ahorro y eficiencia, priorizándose, asimismo, la incorporación de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica.

2. En el caso de existencia de redes de calor a partir de energía renovable, la Administración Regional y las entidades del sector público regional impulsarán la conexión a las mismas de los edificios de su titularidad, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de contratación del sector público.

3. La Administración Regional y las entidades del sector público regional que lleven a cabo procedimientos de contratación para la adquisición o cualquier otra modalidad de uso de vehículos, incorporarán en los pliegos de condiciones la priorizando de vehículos de cero emisiones electrificados, en la medida que cubran las necesidades del servicio a realizar, con las salvedades de aquellos servicios en los que, debido a la casuística y variedad de las prestaciones, el modelo eléctrico no puede cubrir en dicho momento las necesidades del servicio, en cuyo caso se procederá a la adquisición de vehículos, priorizando el menor ratio de emisiones contaminantes de acuerdo con la clasificación establecida por la Dirección General de Tráfico,

4. Asimismo, la Administración Regional y las entidades del sector público regional impulsarán, utilizando sus propios edificios o instalaciones, una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos que podrá ser de uso público.”

Disposición Final Tercera. Modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible.

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 4 del artículo 39 queda redactado de la siguiente forma:

“4. En montes en régimen general administrativo, cuando el aprovechamiento consista en la corta de pies arbóreos o arbustivos de especies no protegidas, y su significado ecológico no sea relevante y, además, se trate de pies secos, semisecos, dominados, decrepitos o defectuosos sin valor comercial, cuyo volumen no exceda en su conjunto de cinco metros cúbicos de madera o veinte estéreos de leña, el titular del monte o su representante sólo estará obligado a ponerlo en conocimiento del agente medioambiental en cuya demarcación se ubique el monte,

previamente a la corta, quien dará su conformidad escrita a la misma, para lo cual éste habrá de verificar que el pie o pies afectados se hallan en las condiciones descritas.”

Dos. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 42. Fondo de mejoras.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.2 y 38.3, las entidades locales titulares de los montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras una cuantía del veinte por ciento del importe por el que se hayan adjudicado los aprovechamientos forestales, o de los rendimientos obtenidos por autorizaciones, concesiones u otras actividades desarrolladas en el monte, la cual podrá ser acrecentada voluntariamente por dichas entidades. Este porcentaje será del cien por cien en el caso de montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El fondo tendrá carácter finalista, destinándose a la planificación y ejecución de la gestión forestal y su certificación, así como a la conservación y mejora de los montes o grupos de montes catalogados de la entidad local donde se genera, conforme a un plan aprobado por la Consejería, pudiendo utilizarse también estos fondos para acceder a una mayor financiación a través de fondos europeos y otros que requieran cofinanciación propia.

2. Con carácter general, corresponde a la Consejería, la administración del fondo de mejoras, salvo en el caso de que se encomiende a la entidad local titular del monte conforme a lo que se establezca en las disposiciones de aplicación de la presente Ley.

3. En aquellos casos en los que existan fondos ajenos cuya finalidad sea la gestión forestal, y siempre que sea necesario aplicar un porcentaje de cofinanciación por parte de la entidad beneficiaria de los mismos, los créditos presupuestarios del fondo de mejoras podrán ser destinados a este fin.”

Disposición Final Cuarta. Modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, queda modificada como sigue:

Uno. La letra c) del artículo 6, queda redactada de la siguiente forma:

“c) Desarrollar políticas educativas para la infancia, ampliando progresivamente la oferta de plazas escolares en el primer ciclo de la

educación infantil con la participación de otras administraciones, especialmente la administración local, e iniciativas privadas. Se arbitrarán formulas específicas para el ámbito rural para el fomento de iniciativas que garanticen oferta suficiente para el primer ciclo de educación infantil.”

Dos. El apartado 3 del artículo 69, queda redactado de la siguiente forma:

“3. La oferta de formación profesional se decidirá por la Consejería competente en materia de educación en colaboración con la Consejería competente en materia laboral, los agentes sociales y económicos representados en el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, y las corporaciones locales. En la planificación de la misma se tendrán en cuenta las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y los intereses y expectativas de la ciudadanía, con especial protección a los sectores productivos vinculados al desarrollo rural y lucha contra la despoblación.

Se facilitará la participación de empresas del entorno rural en las modalidades de Formación Profesional Dual y en la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

La Consejería competente en materia de educación impulsará las prácticas en empresas, instituciones y administraciones del entorno rural, favoreciendo la movilidad y empleabilidad del alumnado de formación profesional.”

Tres. La letra d) del apartado 1 del artículo 93, queda redactada de la siguiente forma:

“d) La cohesión social, atendiendo especialmente a los colectivos desfavorecidos, con necesidades de formación básica o de inserción laboral y al entorno rural que por la dispersión poblacional tiene dificultad de acceso a los centros de educación de personas adultas.”

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 128, con el siguiente contenido:

“3. La Consejería competente en materia de educación mantendrá un centro docente público en aquellas localidades donde residan al menos cuatro alumnos y alumnas que cursen los niveles de educación infantil y de educación primaria.

Si un centro educativo contase con menos de 4 alumnos y alumnas y la perspectiva de incorporación de alumnado en los siguientes cursos escolares fuese favorable, se podrá mantener abierta excepcionalmente contando con menos de 4 alumnos y alumnas.”

Disposición Final Quinta. Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.

La Ley 8/2013, de 21 de noviembre de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo artículo 12.bis con la siguiente redacción:

Artículo 12. bis. Deducción por residencia habitual en zonas rurales.

1. Las personas contribuyentes que teniendo su residencia habitual en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refiere el artículo 12 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, cumplan además el requisito de estancia efectiva en el mismo en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley antes citada, podrán aplicarse en la cuota íntegra autonómica la que corresponda de las siguientes deducciones:

a) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de intensa despoblación:

- Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 20%.
- Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 habitantes: 15%.

b) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de extrema despoblación:

- Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 25%.
- Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 habitantes: 20%.

2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en el apartado anterior dará lugar a la integración de las cantidades deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio en que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes intereses de demora.

Dos. Se introduce un nuevo artículo 12.ter con la siguiente redacción:

Artículo 12 ter. Deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales.

1. Las personas contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 10 por ciento de las cantidades que durante el período impositivo satisfagan por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que la vivienda esté situada en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refiere el artículo 12 de la Ley XX/XXXX y que la población del mismo sea inferior a 2.000 habitantes.

b) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se haya producido a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley citada en la letra anterior.

2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por la persona contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento.

La base máxima total de la deducción será de 180.000 euros, o el importe de adquisición o rehabilitación de la vivienda que da origen a la deducción si este fuera menor, minorado por los importes recibidos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en concepto de subvenciones por la adquisición o rehabilitación de la vivienda. A su vez, la base máxima a aplicar en cada ejercicio será de 9.040 euros.

3. Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado ya de la deducción prevista en este artículo, la base máxima de la deducción se minorará en las cantidades invertidas en la adquisición de las viviendas anteriores, en tanto hubieran sido objeto de desgravación.

Cuando con ocasión de la enajenación de una vivienda habitual por la que se hubiera practicado la deducción prevista en este artículo se genere una ganancia patrimonial exenta por reinversión, la base de deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva vivienda se minorará en el importe de la ganancia patrimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este caso, no se podrá practicar deducción por la adquisición de la nueva

mientras las cantidades invertidas en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.

4. En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, la persona contribuyente podrá seguir practicando esta deducción, en los términos previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las cantidades satisfechas en el período impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden.

5. La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio de la persona contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arroja su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio de la persona contribuyente.

6.- Los conceptos de adquisición, rehabilitación y vivienda habitual serán los fijados por la normativa estatal vigente a 31 de diciembre de 2012 para la deducción por inversión en vivienda habitual.

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Se aplicará el tipo reducido del 6 por ciento a las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que el valor real de la vivienda no exceda de 180.000 euros y se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la adquisición se financie en más del 50 por ciento mediante préstamo hipotecario sobre el inmueble adquirido concertado con alguna de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, cuyo importe no exceda del valor declarado de la vivienda adquirida; y que la adquisición de la vivienda y la concertación del préstamo hipotecario se realicen en la misma fecha.

b) Que el valor real de la vivienda sea igual o superior al valor asignado a la misma en la tasación realizada a efectos de la mencionada hipoteca.

No obstante, cuando las transmisiones de inmuebles tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual radicada en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, el tipo reducido a aplicar será el siguiente:

- a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de despoblación: 5 por ciento.
- b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 4 por ciento.
- c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 3 por ciento.”.

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 19, con la siguiente redacción:

“5. En las transmisiones de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o a locales de negocios, y estén ubicados en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, se aplicarán los siguientes tipo impositivos:

- a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de despoblación: 5 por ciento.
- b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 4 por ciento.
- c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 3 por ciento.”.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Se aplicará el tipo del 0,75 por ciento a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto

pasivo, siempre que el valor real de la vivienda no exceda de 180.000 euros y se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la adquisición se financie en más del 50 por ciento mediante préstamo hipotecario sobre el inmueble adquirido, concertado con alguna de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario; que el importe del préstamo hipotecario no exceda del valor declarado de la vivienda adquirida; y, a su vez, que la adquisición de la vivienda y la concertación del préstamo se realicen en la misma fecha.
- b) Que el valor real de la vivienda sea igual o superior al valor asignado a la misma en la tasación realizada a efectos de la mencionada hipoteca.

No obstante, cuando la vivienda cuya adquisición se documenta radique en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, el tipo reducido a aplicar será el siguiente:

- a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de despoblación: 0,50 por ciento.
- b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 0,25 por ciento.
- c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 0,15 por ciento.”.

Seis. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21, con la siguiente redacción:

“5. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o a locales de negocios, y estén ubicados en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, se aplicarán los siguientes tipo impositivos:

- a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de despoblación: 0,75 por ciento.
- b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 0,50 por ciento.
- c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 0,25 por ciento.”

Siete. Se da nueva redacción al artículo 25, en los siguientes términos:

“Artículo 25: Bonificaciones de la cuota tributaria por actuaciones en suelo industrial y terciario de zonas rurales.

1. Se establece una bonificación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten los actos de agrupación, agregación, segregación y división que se efectúen sobre suelos destinados a uso industrial o terciario y situados en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley XX/XXXX, de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla- La Mancha.

2. En función del municipio donde se ubique el suelo sobre el que se realizan los actos expresados en el número anterior, el importe de la bonificación será:

a) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de despoblación: bonificación del 50 por ciento.

b) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: bonificación del 75 por ciento.

c) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: bonificación del 95 por ciento.

3. La aplicación de la bonificación prevista requerirá que en la escritura o acta notarial que documenta el acto de agrupación, agregación, segregación y división quede expresamente recogido que el suelo sobre el que se actúa está destinado a uso industrial o terciario.”.

Ocho. La Disposición Adicional Única pasa a denominarse Disposición Adicional Primera.

Nueve. Se introduce una nueva Disposición Adicional Segunda con la siguiente redacción:

Disposición Adicional Segunda. Actualización de núcleos de población en los que se aplican los artículos 12.bis y 12.ter.

A efectos de aplicación de las deducciones previstas en los artículos 12.bis y 12.ter se tomará como población de los municipios la que, conforme a su respectivo padrón municipal, tuvieran a 1 de enero de cada año.

No obstante, a los efectos indicados en el párrafo anterior no se tomarán en consideración las variaciones de población respecto al padrón municipal de 2021 que supongan una minoración o inaplicación de las deducciones que conforme al mismo resultasen procedentes. En tales casos, dichas deducciones podrán seguir aplicándose en las condiciones y cuantías que resultasen procedentes conforme a la población del expresado padrón municipal.”.

Disposición Final Sexta. Modificación de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

Se suprime la letra i) del artículo 3 de la Ley 6/2019 de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

Disposición Final Séptima. Adaptación al contenido de la norma.

El Consejo de Gobierno y, en su caso, las Consejerías competentes, deberán adaptar el contenido de sus normas sectoriales a lo dispuesto en esta ley, en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor.

Disposición Final Octava. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

El Consejo de Gobierno aprobará en el plazo de tres meses, desde la publicación de esta Ley, el Decreto por el que determinen las zonas rurales de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la tipología establecida en el artículo 11.

Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Disposición Final Novena. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.